

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

Expediente 049/2026 (A/SER-035823/2025)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “EXPERIMENTACIÓN DEL CONTRATO DE IMPACTO SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PARA PREVENIR LA CRONIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE SINHOGARISMO, COFINANCIADO POR EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

Cláusula 1. Características del contrato.

TÍTULO: “*Experimentación del contrato de impacto social como instrumento de financiación de los servicios sociales, para prevenir la cronificación de las situaciones de sinhogarismo, cofinanciado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATIONEU*”

1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto de este contrato de servicios es la experimentación del contrato de impacto social como instrumento de financiación de los servicios sociales, mediante una intervención innovadora consistente en la atención temprana y la prevención de la cronificación de las situaciones de sinhogarismo existentes en los programas públicos de atención a personas sin hogar. Su pago se vincula a la consecución de unos resultados determinados y su financiación primaria, a la participación de entidades facilitadoras de inversión de impacto.

El contenido del contrato incluye tanto la experimentación de un contrato de impacto social como instrumento de financiación de la intervención, como la propia intervención, a desarrollar tanto con personas alojadas en las viviendas incluidas en programas públicos de atención a personas sin hogar, como con aquellas que se encuentran en situación inminente de sinhogarismo, con objeto de evitar la cronificación de las situaciones de sinhogarismo e, incluso, la entrada misma en dichas situaciones (en adelante, “la intervención”).

En cuanto a la experimentación de un contrato de impacto social como instrumento de financiación de la intervención, se trata de un tipo de contratos de pago por resultados cuyo rasgo característico, la transferencia de riesgo a los inversores privados, facilita la financiación de innovación social para la Administración, a la vez que su enfoque en resultados le ayuda a poner a las personas en el centro de las políticas públicas. Los contratos de pago por resultados son aquellos cuyos pagos se vinculan a la consecución de unos objetivos de impacto social, previamente acordados y formalizados en los pliegos de condiciones mediante unas métricas específicas. La principal diferencia con los contratos tradicionales es que en estos se establece el pago de una tarifa fija por la realización de la prestación o servicio objeto del contrato, sin tener en cuenta el resultado obtenido. Por asumir dicho riesgo, el inversor recibe una rentabilidad asociada al capital adelantado para financiar la intervención social, rentabilidad que corre a cuenta de los ahorros generados a la Administración por dicha intervención. Esta característica los hace idóneos para financiar intervenciones sociales innovadoras y de tipo preventivo para las cuales suele ser difícil encontrar recursos públicos. Así se recoge en la Adenda de 5 de marzo de 2025, de modificación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad de Madrid para la ejecución de proyectos con cargo a los Fondos Europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y resiliencia, correspondiente al Anexo III y nueva flexibilización (BOCM de 11 de marzo).

La inversión de impacto se define como aquella que intencionalmente busca un impacto social o medioambiental medible, además de un retorno financiero, según SpainNAB (el Consejo Asesor para la Inversión de Impacto, una alianza de 28 organizaciones líderes de la comunidad inversora, empresarial,

tercer sector y sociedad civil, para impulsar y promover la inversión de impacto en España, que representa a nuestro país ante el GSG, Global Steering Group for Impact Investment, al cual pertenecen más de 35 países)⁽¹⁾.

En cuanto a la intervención, que deberá diseñarse según se establece en la cláusula 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, PPTP, pretende evitar la cronificación de las situaciones de sinhogarismo. Existen programas públicos de atención a las personas sin hogar, mediante las metodologías Housing First, Housing Led y otras, en los que las personas permanecen durante años, cronificándose, así, la situación de sinhogarismo. Esto da lugar a un incremento continuo de los recursos públicos necesarios para mantener dichos programas y un estancamiento de la rotación de las plazas ⁽²⁾.

Esta licitación, por tanto, pretende obtener varias soluciones innovadoras aún no disponibles en el mercado, referidas, respectivamente, a la experimentación del contrato de impacto social como instrumento de financiación de los servicios sociales, y al diseño e implementación de un modelo de intervención para evitar la cronificación de las situaciones de sinhogarismo.

La necesidad de obtener ambas soluciones innovadoras lleva a considerar, como requisito mínimo que han de cumplir todos los licitadores, la concurrencia de una asociación formada por la entidad o entidades facilitadoras de inversión de impacto y la entidad o entidades prestadoras de la intervención. Esta asociación podrá adoptar cualquier forma de asociación empresarial prevista en la normativa vigente.

La determinación del objeto del contrato se completa con las cláusulas 2 a 7 del PPTP, que se dan por reproducidas, así como a la cláusula 8 del mismo pliego, que recoge las obligaciones específicas del contratista. Todo ello, en relación con lo dispuesto en el artículo 99.1 LCSP.

Régimen jurídico del contrato: el contrato se rige por las prescripciones contenidas en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el PPTP, y, supletoriamente, por la restante normativa legal de aplicación, de donde se derivarán los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

Los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre la experimentación que constituye el objeto del contrato corresponden al órgano de contratación, el cual, por tanto, tiene la potestad de ejercicio en exclusiva de los derechos de explotación de aquellos, y, en concreto, de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, sin limitación temporal o espacial alguna. Los derechos contenidos en este párrafo se refieren tanto al modelo de colaboración (cláusula 5 del PPTP) como a la evaluación de los resultados de dichos modelos (cláusula 7 del PPTP).

Respecto al modelo teórico de intervención, los derechos de propiedad industrial e intelectual corresponden a la entidad adjudicataria, la cual, por tanto, tiene la potestad de ejercicio en exclusiva de los derechos de explotación de aquellos, y, en concreto, de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, sin limitación temporal o espacial alguna.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la adjudicación del contrato conlleva la concesión, a favor del órgano de contratación, de una licencia de uso no exclusiva y gratuita, sin limitación temporal o espacial alguna, del modelo teórico de intervención, tal como se entregue a aquel en los momentos previstos en la cláusula 5 del PPTP.

De esta manera, el órgano de contratación incentiva la innovación, sin coartar el libre uso del modelo teórico de intervención, en un momento posterior, por parte de la entidad adjudicataria y, en concreto, de las entidades prestadoras de la intervención..

En cuanto al modelo de colaboración y al modelo teórico de intervención diseñados en la fase de investigación e innovación (cláusula 5 del PPTP), la adjudicataria debe garantizar que son originales, y que responderá de todas las reclamaciones que pudieran presentar terceros en relación con su titularidad, así como de los daños y perjuicios que, en su caso, se reclamen por este asunto al órgano de contratación. La adjudicataria asumirá, en su caso, todas las responsabilidades y costes derivados del proceso de explotación de ambos modelos, y evitará cualquier reclamación contra el órgano de contratación por vulnerar los derechos de terceros.

⁽¹⁾ Véanse, por todas, las publicaciones: Varios, *La inversión de impacto en España en 2021*, Madrid 2022, <https://spainnab.org/wp-content/uploads/2023/09/La-inversion-de-impacto-en-Espana-2021.pdf> (consultada el 01.06.2023); Varios, *La oferta de capital de impacto en España en 2022*, Madrid 2023 https://spainnab.org/wp-content/uploads/2023/09/Informe-SpaiNAB_Oferta-Capital-Impacto-Epana.pdf (consultada el 01.11.2023).

⁽²⁾ Tal como se puso de manifiesto en la consulta preliminar al mercado llevada a cabo durante los meses de abril y mayo de 2023: <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/contrato-publico/consulta-preliminar-mercado-licitacion-contrato-impacto-social-servicio-provision> (consultada el 01.04.2023).

División en lotes: no.

Códigos CPV principales: 85310000-5 Servicios de asistencia social
85311000-2 Servicios asistencia social con alojamiento

Contrato no reservado a Centro Especial de Empleo de iniciativa social, ni a Empresas de Inserción ni a organizaciones para servicios sociales, culturales y de salud.

2. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.

ÓRGANO GESTOR: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	
DENOMINACIÓN	Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
CÓDIGO DIR3	A13002916
DIRECCIÓN POSTAL	Calle O'Donnell, 50. 28009 Madrid
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO	
DENOMINACIÓN	Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación
CÓDIGO DIR3	GE0018743
DIRECCIÓN POSTAL	Calle O'Donnell, 50. 28009 Madrid
OFICINA CONTABLE: ÓRGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCIÓN DE CONTABILIDAD	
DENOMINACIÓN	Intervención delegada en la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
CÓDIGO DIR3	A13029041
DIRECCIÓN POSTAL	Calle O'Donnell, 50. 28009 Madrid
ÓRGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO	
DENOMINACIÓN	Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación
DIRECCIÓN POSTAL	Calle O'Donnell, 50. 28009 Madrid

Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: Subdirección General de Calidad e Innovación

Responsable del contrato: Titular de la Subdirección General de Calidad e Innovación

3. NO SE TRATA DE UN CONTRATO QUE CONLLEVE PRESTACIONES DIRECTAS A FAVOR DE LA CIUDADANÍA.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y CRÉDITO EN QUE SE AMPARA.

Tipo de presupuesto: cuantía máxima determinada.

Sistema de determinación del presupuesto: a tanto alzado.

Imputación presupuestaria: Programa 2390, Partida 22706.

El contrato se financia con el **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**: sí, parcialmente, la anualidad correspondiente a 2026

Fondo estatal de recuperación, transformación y resiliencia: 2022/00763

Código de referencia único del proyecto: C.22.I2.P4.S47

Presupuesto base de licitación.

Base imponible:..... 2.400.000,00 euros

10% IVA: 240.000,00 euros

Importe total: 2.640.000,00 euros

4.1. COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS Y OTROS EVENTUALES GASTOS.

Fase de investigación e innovación.

Base imponible: 300.000,00 euros

10% IVA: 30.000,00 euros

Importe total: 330.000,00 euros

Diseño del modelo de colaboración.

Para calcular los costes salariales de cada categoría profesional y adecuarlos al precio de mercado, se ha tenido en cuenta el XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública (BOE de 16 de abril de 2025). Este Convenio determina, en su artículo 15, los grupos profesionales; en su artículo 20.1, una jornada ordinaria máxima de trabajo efectivo, en cómputo anual, de 1.800 horas anuales; y, en su anexo I, las tablas salariales para cada año

No resulta posible su desagregación en función del género, tal como exige el artículo 100.2 de la LCSP, pues dicho Convenio no establece diferencias retributivas por razón de tal circunstancia.

Se considera necesario contar con tres personas representantes de cada una de las partes implicadas: las entidades facilitadoras de inversión de impacto y las entidades prestadoras de la intervención, así como con una persona que coordine los trabajos, dirigidos a obtener el entregable previsto en la cláusula 5 del PPTP. Resulta fundamental, en este momento, contar tanto con personas expertas financieras capaces de hacer la modelización de flujos de caja, el análisis de sostenibilidad económica, o la gestión de riesgos financieros; como con personas expertas en consultoría de negocio, capaces de definir modelos operativos, gestión del cambio y análisis o definición de procesos.

No se considera necesario que estas personas formen parte de la intervención, ni de su diseño, por lo que se toma como referencia un convenio colectivo en el cual el personal incluido en el área de actividad 4 (artículo 15) desempeña actividades relacionadas con la que constituyen el objeto del entregable, referidas en el párrafo anterior y en la cláusula 5 del PPTP

El resto de los costes se ha calculado a tanto alzado:

- a) ***Incremento IPC:*** la jurisprudencia ha establecido la aplicabilidad de la doctrina del riesgo imprevisible y la cláusula *rebus sic stantibus* en casos de incremento sobrevenido de las condiciones salariales por cambio en el convenio colectivo aplicable. Siguiendo indicaciones de la Oficina Técnica de Análisis Económico de Políticas Públicas, de la Viceconsejería de Hacienda y Función Pública, se tienen en cuenta las proyecciones macroeconómicas del Banco de España en cuanto a la inflación prevista para los años de ejecución del contrato ⁽³⁾.
- b) ***Incidencias de personal:*** 5,55% de los costes de personal, correspondiente a la cobertura de vacantes, vacaciones, etc., que deberá llevar a cabo la adjudicataria, de ser necesario. El *Informe laboral de absentismo laboral junio 2025*, elaborado por Randstad Research ⁽⁴⁾, señala, para el sector “Actividades de servicios sociales sin alojamiento”, un absentismo del 11,1%. Siguiendo indicaciones de la Oficina Técnica de Análisis Económico de Políticas Públicas, de la Viceconsejería de Hacienda y Función Pública, se minora dicho absentismo en un 50%.
- c) ***Costes directos:*** 1% de los costes de personal. Se consideran costes directos los directamente relacionados con las actuaciones previstas en el alcance del contrato (cláusula 2 del PPTP), tales como material fungible o alquiler de tecnologías y equipamientos indispensables para la adecuada ejecución del contrato.
- d) ***Gastos generales:*** 6% de la suma de los costes directos, siguiendo indicaciones de la Oficina Técnica de Análisis Económico de Políticas Públicas, de la Viceconsejería de Hacienda y Función Pública. Se consideran gastos generales los propios del funcionamiento regular de la empresa adjudicataria, que sirven de soporte para la adecuada ejecución del contrato, tales como selección y

⁽³⁾ <https://www.bde.es/wbe/es/publicaciones/analisis-economico-investigacion/proyecciones-macro-informe-tri-mestral/proyecciones-e-informe-trimestral-de-la-economia-espanola-junio-2025.html>.

⁽⁴⁾ <https://d2x1h7jfmz7hr5.cloudfront.net/wp-content/uploads/2025/07/Randstad-Research-Informe-Absentismo-Laboral-Junio-2025.pdf?x91883>.

formación del personal, renovación de la certificación UNE-EN-ISO 9001:2015 exigida como requisito de solvencia, etc.

- e) Margen de beneficio: 6%: de la suma de los costes directos, siguiendo indicaciones de la Oficina Técnica de Análisis Económico de Políticas Públicas, de la Viceconsejería de Hacienda y Función Pública.

Área 4	Grupo profesional	Salario base bruto anual	Plus convenio	Complemento de antigüedad	Complemento de profesionalidad
Dirección	A	27.656,57	2.461,14	2.765,66	0,00
Titulado	B1	26.958,95	2.995,44	2.695,90	0,00

Área 4	Grupo profesional	Importe bruto anual total	Importe bruto mensual	N.º personas	% dedicación	Total importe bruto mensual
Dirección	A	32.883,37	2.740,28	1	73,00%	2.000,40 €
Titulado	B1	32.650,29	2.720,86	6	100,00%	16.325,14 €
Total salarios						18.325,54 €
Cotizaciones sociales (33%)						6.047,43 €
Total mensual						24.372,97 €

Concepto	Importe 3 meses
Costes directos: personal	73.118,91 €
Costes directos: incremento IPC (1,7%)	1.243,02 €
Costes directos: incidencias de personal (5,5% costes personal)	4.021,54 €
Costes directos: otros costes directos (1% costes personal)	731,19 €
Suma costes directos	79.114,66 €
Gastos generales (6% suma costes directos)	4.746,89 €
Beneficio industrial (6%)	4.746,89 €
Suma costes indirectos	9.493,78 €
Suma costes directos + costes indirectos	88.608,44 €
Base imponible redondeada a múltiplo de 100:	88.700,00 €
IVA (10%)	8.870,00 €
TOTAL	97.570,00 €

El resultado de esta fase es el entregable referido en la cláusula 5.1.1 del PCAP, de manera que el cálculo de los costes debe relacionarse con el valor otorgado a dicho entregable por el órgano destinatario del contrato, no con una puesta a disposición del personal incluido en dicho cálculo.

Diseño del modelo teórico de intervención.

Para calcular los costes salariales de cada categoría profesional y adecuarlos al precio de mercado, se ha tenido en cuenta el Convenio colectivo de acción e intervención social 2022-2024 (BOE de 28 de octubre de 2022) ⁽⁵⁾, así como el Acuerdo de subida salarial para 2025 ⁽⁶⁾. Este Convenio establece, en su artículo 22, una jornada anual máxima de trabajo efectivo de 1.728 horas anuales. Y, en su anexo II, las tablas salariales correspondientes a los distintos grupos profesionales.

No resulta posible su desagregación en función del género, tal como exige el artículo 100.2 de la LCSP, pues dicho Convenio no establece diferencias retributivas por razón de tal circunstancia.

Se considera necesario contar con un importante número de profesionales, que puedan llevar a cabo las tareas dirigidas a obtener el entregable previsto en la cláusula 5 del PPTP, así como con un par de personas capaces de dirigir equipos más pequeños, en función de las tareas concretas, y una persona que coordine los trabajos. Tareas a realizar en este momento serían: entrevistas a las personas participantes en programas públicos de atención a personas sin hogar y a quienes se encuentran en situación reciente de sinhogarismo o en riesgo inminente de estarlo (durmiendo en coches, o en el sofá de casas de familiares, o alternando días en pensiones con noches en calle, o pernoctando en salas de espera de hospitales...); análisis comparativo de alternativas; validación de supuestos con evidencia internacional; evaluación de viabilidad en el contexto madrileño; diseño del plan de evaluación (incluyendo la metodología de evaluación, la selección del evaluador independiente y la recogida de datos iniciales para medir el progreso y el impacto neto); determinación de los puntos críticos de revisión a partir de los cuales se decida continuar o no con la intervención, o realizar ajustes en ella, etc.

El resto de los costes se ha calculado a tanto alzado:

- a) **Incremento IPC**: la jurisprudencia ha establecido la aplicabilidad de la doctrina del riesgo imprevisible y la cláusula rebus sic stantibus en casos de incremento sobrevenido de las condiciones salariales por cambio en el convenio colectivo aplicable. Siguiendo indicaciones de la Oficina Técnica de Análisis Económico de Políticas Públicas, de la Viceconsejería de Hacienda y Función Pública, se tienen en cuenta las proyecciones macroeconómicas del Banco de España en cuanto a la inflación prevista para los años de ejecución del contrato.
- b) **Incidencias de personal**: 5,55% de los costes de personal, correspondiente a la cobertura de vacantes, vacaciones, etc. que deberá llevar a cabo la adjudicataria, de ser necesario. El Informe laboral de absentismo laboral junio 2025, elaborado por Randstad Research, señala, para el sector “Actividades de servicios sociales sin alojamiento”, un absentismo del 11,1%. Siguiendo indicaciones de la Oficina Técnica de Análisis Económico de Políticas Públicas, de la Viceconsejería de Hacienda y Función Pública, se minora dicho absentismo en un 50%.
- c) **Costes directos**: 1% de los costes de personal. Se consideran costes directos los directamente relacionados con las actuaciones previstas en el alcance del contrato (cláusula 2 del PPTP), tales como material fungible o alquiler de tecnologías y equipamientos indispensables para la adecuada ejecución del contrato.
- d) **Gastos generales**: 6% de la suma de los costes directos, siguiendo indicaciones de la Oficina Técnica de Análisis Económico de Políticas Públicas, de la Viceconsejería de Hacienda y Función Pública. Se consideran gastos generales los propios del funcionamiento regular de la empresa adjudicataria, que sirven de soporte para la adecuada ejecución del contrato, tales como selección y formación del personal, renovación de la certificación UNE-EN-ISO 9001:2015 exigida como requisito de solvencia, etc.
- e) **Margen de beneficio**: 6%: de la suma de los costes directos, siguiendo indicaciones de la Oficina Técnica de Análisis Económico de Políticas Públicas, de la Viceconsejería de Hacienda y Función Pública.

⁽⁵⁾ https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17633.

⁽⁶⁾ <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-12484>.

2025	Grupo profesional	Salario base bruto mensual	Salario base bruto anual	Complemento Responsabilidad	C. Exp. Profesional
Dirección	0	2.137,05	29.918,66	5.656,90	0,00
Titulado	0	2.137,05	29.918,66	5.656,90	0,00
Titulado	1	1.822,78	25.518,86	0,00	911,38

2025	Imp. bruto anual	Imp. bruto mensual	Nº personas	% dedicación	Imp. bruto mensual
Dirección	35.575,56	2.964,63	1	84%	2.490,29
Titulado	35.575,56	2.964,63	2	100%	5.929,26
Titulado	26.430,24	2.202,52	16	100%	35.240,32
Total salarios					43.659,87
33% cotizaciones sociales					14.407,76
Total mensual					58.067,63

Concepto	Importe 3 meses
Costes directos de personal	174.202,89
Costes directos: incremento IPC (1,7%)	2.961,45
Costes directos: incidencias de personal (5,5% costes de personal)	9.668,26
Costes directos: otros costes directos (1% costes de personal)	1.742,03
Suma costes directos	188.574,63
Gastos generales (6% costes generales)	11.314,48
Beneficio industrial (6%)	11.314,48
Suma costes indirectos	22.628,96
Suma costes directos más costes indirectos	211.203,59
Base imponible redondeada a múltiplo de 100	211.300,00
10% IVA	21.130,00
Total	232.430,00

El resultado de esta fase es el entregable referido en la cláusula 5.1.2 del PCAP, de manera que el cálculo de los costes debe relacionarse con el valor otorgado a dicho entregable por el órgano destinatario del contrato, no con una puesta a disposición del personal incluido en dicho cálculo

4.2. FASE DE INTERVENCIÓN.

Base imponible: 2.100.000,00 euros

Importe del IVA: 210.000,00 euros

Importe total: 2.310.000,00 euros

Al tratarse de un pago por resultados, el mismo se difiere hasta su verificación semestral, recogida en la cláusula 6 del PPTP.

La verificación de los resultados obtenidos con la intervención debe ser externa y desarrollada por una entidad independiente, tanto de la adjudicataria como de las entidades facilitadoras de inversión de impacto y de las entidades prestadoras de la intervención, que tenga reconocido prestigio y experiencia en la materia y cuente con un equipo multidisciplinar en el que estén presentes profesionales del ámbito académico o de la investigación social.

Esta verificación debe realizarse con carácter semestral, transcurrido el primer año de la fase de intervención referida en la cláusula 5 del PPTP, y conllevará, en su caso, el abono establecido para los "casos de éxito" "principal" y "secundario".

Tras cada verificación semestral externa la persona Responsable del contrato analizará la existencia de "casos de éxito principal", y, en la última verificación, al finalizar la intervención, la existencia de "casos de éxito principal" y de "casos de éxito secundario". Tras cada verificación, el órgano de contratación

remunerará a la adjudicataria con el importe resultante de dicho análisis, teniendo en cuenta las valoraciones siguientes, alineadas con los resultados contenidos en la cláusula 6 del PPTP:

- a) Activación y compromiso de participación: 6.000 €
- b) Plan de salida autónoma de la situación de sinhogarismo: 3.000 €
- c) Mejora del bienestar auto percibido: 3.000 €
- d) Incremento de ingresos económicos: 6.000€
- e) Vivienda: 24.000 €

Por tanto, cada “caso de éxito principal” conllevará una remuneración total de 42.000 euros, mientras que cada “caso de éxito secundario” conllevará una remuneración que ascenderá al sumatorio de los resultados conseguidos por la persona participante en el momento de la verificación final.

Para su cálculo se ha tomado como referencia el coste medio anual de los programas públicos de atención a personas sin hogar gestionados por la Comunidad de Madrid y por el ayuntamiento de Madrid:

Contrato	Administración pública	Incluye coste alojamiento	Periodo	Presupuesto	Duración (años)	N.º plazas	Precio plaza/año
La Rosa	Ayuntamiento de Madrid	No	2026-2028	4.829.968,57 €	2	65	37.153,60 €
Salamina	Ayuntamiento de Madrid	No	2026-2028	8.230.384,80 €	2	176	23.381,78 €
Pedro Meca	Ayuntamiento de Madrid	No	2024-2025	1.335.196,60 €	1,55	32	26.919,29 €
Juan Luis Vives	Ayuntamiento de Madrid	No	2022-2024	6.149.972,02 €	2	132	23.295,35 €
Puerta Abierta	Ayuntamiento de Madrid	No	2022-2024	7.456.307,91 €	2	132	28.243,59 €
Construyendo hogar	Ayuntamiento de Madrid	Sí	2023-2025	4.168.852,51 €	2	75	27.792,35 €
Convalecencia	Comunidad de Madrid	Sí	2026-2028	6.685.600,00 €	3	70	31.836,19 €
Emergencia	Comunidad de Madrid	Sí	2022-2024	1.849.751,64 €	2	40	23.121,90 €
Mujeres sin hogar	Comunidad de Madrid	Sí	2023-2025	1.885.927,37 €	2	30	31.432,12 €
Housing First	Comunidad de Madrid	Sí	2023-2025	983.640,00 €	2	20	24.591,00 €

El coste promedio de estos contratos es de 27.776,72 € plaza/año, siendo insignificante la diferencia entre los contratos cuyo coste no incluye el alojamiento (27.798,72 €) y aquellos que sí lo incluyen (27.754.71 €). En cuanto a la duración, su promedio es de 2 años.

Uno de los elementos del contrato de impacto social es retribuir a la entidad inversora de impacto con el ahorro obtenido por la Administración. Por tanto, se considera adecuada la retribución del 75% del coste promedio indicado: 21.000 € al año, es decir 42.000 € por el periodo de dos años.

El modelo económico, por tanto, lleva a remunerar cada “caso de éxito principal” con el importe equivalente al 75% del promedio del precio anual de la plaza en estos programas públicos. Así se obtiene un importante ahorro frente a lo que supondría el mantenimiento de la persona en dichos programas, y la reiteración de ese importe, anualmente, de manera indefinida.

Se considera que el mayor obstáculo es hacer frente al coste de la vivienda, por lo que la consecución de ese resultado alcanza los 4/7 del total (24.000 €). Los 3/7 restantes (18.000 €) se subdividen en cuatro resultados más, de los cuales se consideran de mayor importancia la activación y compromiso de participación y el incremento de ingresos económicos, remunerado cada uno de ellos con un 1/7 (6.000 € cada uno). Esto es así porque resulta fundamental, para el éxito de la intervención, contar con la participación voluntaria, decidida y activa en la intervención, así como con un incremento de los ingresos económicos que permita hacer frente al coste de la vivienda de manera autónoma, fuera de los programas públicos de atención a personas sin hogar. Finalmente, el 1/7 restante remunera dos resultados más, de gran importancia, como son la participación de la persona en el diseño de un plan de salida autónoma de su situación de sinhogarismo y la mejora de determinados indicadores subjetivos de calidad de vida (3.000 € cada uno)..

4.3. DISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES.

Anualidad	Base imponible	10% IVA	Total
2026	300.000,00	30.000,00	330.000,00
2027	900.000,00	90.000,00	990.000,00
2028	1.200.000,00	120.000,00	1.320.000,00
Total	2.400.000,00	240.000,00	2.640.000,00

El desglose de anualidades corrientes corresponde a:

- 2026: remuneración de la fase de investigación e innovación.
- 2027: remuneración de los “casos de éxito principal” determinados por la verificación de resultados llevada a cabo tras el mes doce desde el inicio de la intervención.
- 2028: remuneración de los “casos de éxito principal” determinados por la verificación de resultados llevada a cabo tras los meses dieciocho y veinticuatro desde el inicio de la intervención.

Si existiese importe remanente de la anualidad 2027, deberá llevarse a cabo un reajuste de anualidades que permita hacer frente a la remuneración de 2028.

4.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 2.400.000,00 euros.

- Valor estimado de la fase de investigación e innovación: 300.000,00 euros
- Valor estimado de la fase de intervención: 2.100.000,00 euros

Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado es el establecido en el artículo 101.14 de la LCSP.

5. CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.

6. HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Como garantía de la calidad en la prestación de la intervención, la adjudicataria, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a la firma del contrato, debe acreditar la presentación de la comunicación de inicio de un servicio de atención social, conforme a lo previsto en el artículo 56 de la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Si alguna de las entidades prestadoras de la intervención que conforman la adjudicataria ya viniese prestando dicho servicio, será suficiente con acreditarlo mediante la correspondiente certificación.

A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el servicio de atención social debe tener la siguiente configuración:

Sector de atención: Personas sin hogar.

Tipología de servicio: Otras prestaciones y servicios.

El certificado que acredite haber realizado la citada comunicación previa, o venir prestando el mencionado servicio, se aportará de oficio por el Área de Registro y Gestión Económico-Administrativa, de la Subdirección General de Calidad e Innovación.

A esta habilitación se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial, de manera que su incumplimiento se considerará causa de resolución conforme el apartado f) del artículo 211 de la LCSP.

7. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL.

La constitución de una asociación formada por una o varias entidades facilitadoras de inversión de impacto y una o varias entidades prestadoras de la intervención.

Para su acreditación deberá presentarse bien un compromiso de constitución en UTE, consorcio o cualquier otra forma de asociación empresarial prevista en la normativa vigente, formada por la entidad o entidades facilitadoras de inversión de impacto y la entidad o entidades prestadoras de la intervención, bien un acuerdo o preacuerdo alcanzado entre ellas. En dicho compromiso, acuerdo o preacuerdo, deben identificarse las entidades constituyentes, su participación, y las obligaciones adquiridas por cada una de ellas.

7.1. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

Artículo 87.1.a) de la LCSP: *“Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros”.*

Criterio de selección: la participación en la asociación empresarial, o en el acuerdo o preacuerdo alcanzado, de una o varias entidades facilitadoras de inversión de impacto que aporten el capital necesario para financiar los costes de la intervención.

La acreditación de la solvencia económica y financiera debe efectuarse mediante la presentación de las cuentas anuales de la entidad o entidades facilitadoras de inversión de impacto correspondientes a los tres últimos ejercicios cerrados, en las que deberá figurar, en al menos una de ellas, un importe de facilitación de inversión de impacto, al menos, igual al valor estimado de este contrato.

Dichas cuentas anuales deben haberse depositado en el Registro Mercantil o en otro en el que deban estar inscritas la entidad o entidades, cuando su aprobación y posterior depósito resulte obligatorio para las mismas.

7.2. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL.

Artículo 90.1.a) de la LCSP: *“Una reacción de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.”*

Criterio de selección: la participación, en la asociación empresarial, o en el acuerdo o preacuerdo alcanzado, de una o varias entidades prestadoras de la intervención, que aporten el conocimiento y la experiencia sobre la misma.

La acreditación de la solvencia técnica o profesional debe efectuarse mediante la presentación de la relación de los principales trabajos efectuados en los tres últimos años de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto de este contrato, considerando los CPV recogidos en el apartado 1 de la cláusula 1 de este Pliego, por un importe igual o superior al 70% del valor estimado de este contrato.

Cada trabajo efectuado debe acreditarse, cuando el destinatario pertenezca al sector público, mediante un certificado expedido o visado por el órgano competente; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración responsable, acompañada de los documentos que acrediten la realización de la prestación y el objeto del contrato, incluyendo la denominación, el importe, las fechas de adjudicación y los destinatarios del mismo.

Si el trabajo se ha efectuado como componente de una Unión Temporal de Empresas, debe computarse el importe ejecutado de forma proporcional al porcentaje de participación en la UTE, para lo cual debe aportarse copia de la escritura de su constitución.

7.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA.

Disposición de uno o varias entidades facilitadoras de inversión de impacto que aporten el

capital necesario para financiar los costes de la intervención y de una o varias entidades prestadoras de la misma: sí.

La adjudicataria, en el plazo establecido en el artículo 150.2 de la LCSP, debe aportar la constitución formal como UTE o el acuerdo definitivo alcanzado.

Este compromiso tiene carácter de obligación esencial, por lo que su incumplimiento dará lugar a la resolución del contrato, según lo dispuesto en el artículo 211.1 de la LCSP.

En todo caso, respecto al personal que participe en la ejecución del contrato, la adjudicataria se obliga a cumplir lo establecido en el Convenio colectivo de acción e intervención social 2022-2024, en sus prórrogas y, en su caso, en el que le sustituya, así como en el resto de los instrumentos de negociación colectiva que se apliquen a dicho personal.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 308, apartado segundo, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, a la extinción de este contrato no puede producirse la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos que constituyan su objeto como empleados públicos de la Comunidad de Madrid.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

Tramitación anticipada: no.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Pluralidad de criterios de adjudicación.

Subasta electrónica: no.

9. CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.

La puntuación tendrá un valor máximo de 100 puntos y será el resultado de la suma de las puntuaciones de cada uno de los criterios descritos a continuación, debidamente ponderados.

9.1. CRITERIOS RELACIONADOS CON LOS COSTES.

Número	Descripción	Ponderación
--------	-------------	-------------

1	Oferta económica	40 puntos
---	-------------------------	-----------

Se asignará la máxima puntuación (40 puntos) a la oferta más económica, respecto al presupuesto base de licitación, y la mínima puntuación (0 puntos) a la oferta que se equipare al presupuesto base de licitación, y se interpolarán linealmente las restantes puntuaciones, aplicando la siguiente fórmula:

$$\text{Puntuación} = 40 \times \frac{\text{Baja de licitación de la oferta que se valora, sin IVA}}{\text{Baja de licitación de la oferta más económica, sin IVA}}$$

9.2. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS, hasta60 puntos

Número	Descripción	Ponderación
--------	-------------	-------------

2	Incremento del número de personas participantes en la intervención, hasta	20 puntos
---	---	-----------

Ampliación del número máximo (50) previsto en la cláusula 2 del PPTP.

Se asignará la máxima puntuación (20 puntos) a la oferta presentada por la entidad que incluya un mayor número de personas participantes en la intervención, hasta un máximo de 100, y se asignará la puntuación directamente proporcional al resto de ofertas.

3.....**Experiencia acreditada en publicaciones de investigación sobre la intervención con personas sin hogar**, hasta20 puntos

Se asignará la máxima puntuación (20 puntos) a la oferta presentada por la entidad que justifique la experiencia en un mayor número de publicaciones de investigación sobre la intervención con personas sin hogar, y se asignará la puntuación directamente proporcional al resto de ofertas.

4.....**Experiencia acreditada de la persona directora de los trabajos**, hasta20 puntos

Se asignará la máxima puntuación (20 puntos) a la oferta presentada por la entidad que justifique la experiencia de la persona directora de los trabajos en intervenciones con personas sin hogar, durante un mayor número de años, hasta un máximo de 10 años, y se asignará la puntuación directamente proporcional al resto de ofertas.

El cumplimiento de las mejoras ofertadas por los licitadores se configura como obligación esencial del contrato, de manera que su incumplimiento llevará aparejado la resolución del contrato, de conformidad con el artículo 211 de la LCSP.

9.3. VALORES ANORMALES.

Todos los criterios establecidos anteriormente se tomarán en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales cuando:

- a) se alcance una puntuación igual o superior a 30 puntos en los criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas y la oferta económica sea inferior al presupuesto base de licitación (IVA excluido) en un porcentaje igual o superior al 20% de dicho presupuesto; o
- b) se alcance una puntuación inferior a 30 puntos en los criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas y la oferta económica sea inferior al presupuesto base de licitación (IVA excluido) en un porcentaje igual o superior al 30 % de dicho presupuesto.

10. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Sobre nº 1: en este sobre debe presentarse la documentación administrativa y relativa a criterios objetivos de solvencia. Su contenido se desarrolla en la cláusula 12 de este Pliego.

Sobre nº 2: en este sobre se incluirá la oferta económica (criterio de adjudicación 1.1) conforme al Anexo I a este pliego y la documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas (criterio de adjudicación 2.1) conforme al Anexo IV de este pliego.

Criterio relacionado con los costes. Para justificar la oferta económica, además de incluirse el importe total, deberá detallarse la remuneración correspondiente a cada uno de los resultados referidos en la cláusula 6 del PPTP y en el apartado 4 de esta cláusula.

Criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas.

- Para justificar el incremento del número de personas participantes en la intervención: declaración responsable referida al número máximo de personas participantes en la intervención.
- Para justificar la experiencia en publicaciones de investigación sobre la intervención con personas sin hogar: declaración responsable de la relación de publicaciones de investigación sobre la intervención con personas sin hogar, en las que la entidad figure como autora o coautora, y que superen las veinte páginas.
- Para justificar la experiencia de la persona directora de los trabajos en intervenciones con personas sin hogar, durante un mayor número de años: declaración responsable en la que se identifique la persona directora de los trabajos y se relacionen las intervenciones con personas sin hogar en las que haya participado, indicando los periodos a los que se refiere cada una de las intervenciones.

La no aportación de la documentación técnica referida en este apartado conllevará la asignación de cero puntos en el criterio correspondiente.

En todos los casos, la declaración responsable debe ser firmada por la persona responsable de la entidad o asociación empresarial licitadora.

11. GARANTÍA PROVISIONAL.

No procede.

12. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.

No procede.

13. MEDIOS ELECTRÓNICOS.

Se exige la presentación de ofertas por medios electrónicos: sí.

En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (URL <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>) se ofrece la información necesaria y el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse. Para la presentación de ofertas por medios electrónicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la **cláusula 11** de este pliego.

Subasta electrónica. No procede.

14. GARANTÍA DEFINITIVA.

No procede.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 107.1 de la LCSP, que permite al órgano de contratación, en virtud de las circunstancias concurrentes en el contrato, eximir de la obligación de constituir garantía definitiva especialmente en el caso, entre otros, de contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social.

En este contrato el pago de la primera fase, de investigación e innovación, está vinculado a la consecución de los objetivos intermedios recogidos en la cláusula 5 del PPTP; y el pago de la fase de intervención solo se realizará tras la verificación de los resultados obtenidos de manera ser externa y desarrollada por una entidad independiente.

Teniendo en cuenta que el objetivo de la garantía definitiva es asegurar que la adjudicataria cumpla las condiciones del contrato, se considera procedente su exención, pues los pagos se realizarán tras la comprobación de la consecución, en cada caso de los objetivos previstos en el PPTP.

Teniendo en cuenta que el objetivo de la garantía definitiva es la protección del interés general y el aseguramiento del cumplimiento contractual por parte de la adjudicataria, se considera procedente su exención, pues los pagos se realizarán tras la comprobación de la consecución, en cada caso, de los objetivos previstos en el PPTP.

Por tanto, la mayor garantía del cumplimiento contractual es su vinculación a los resultados, dado que, de no producirse ninguno de ellos, en ninguna de las fases, la adjudicataria no percibirá remuneración alguna. Y solo tras la comprobación de su consecución se llevará a cabo la remuneración pactada, por lo que en ese momento ya se ha verificado el cumplimiento contractual.

Además, ya se contempla como penalidad que la intervención no alcance el número mínimo de personas participantes contemplado en la cláusula 2 del PPTP o el ofertado respecto al criterio de adjudicación 2.1.

Debe tenerse en cuenta, además, que durante la ejecución de la tercera fase, la adjudicataria debe contar con un seguro de responsabilidad civil, lo que redundará en la cobertura de dicho cumplimiento.

15. GARANTÍA COMPLEMENTARIA (artículo 107.2 de la LCSP).

No procede.

16. PÓLIZAS DE SEGUROS.

El adjudicatario, de conformidad con lo establecido en este Pliego, con carácter previo a la formalización del contrato deberá justificar que ha suscrito, a su cargo, uno o varios contratos de seguro para la cobertura de los siguientes riesgos:

Seguro de responsabilidad civil, presentando un certificado de la entidad aseguradora que deberá contener, al menos, los siguientes términos:

- Que se trata de un seguro de responsabilidad civil por los daños que puedan sufrir cualesquiera personas, en sí mismas o en sus bienes, y que deriven del desarrollo de las actividades objeto del presente contrato y por los daños que puedan causar a las personas y a los bienes de terceros, los profesionales y en general cualquier persona vinculada con ellos en la ejecución de este contrato.
- Entidad asegurada y número de póliza.
- Cobertura mínima de 120.000 euros por siniestro y año, sin sublímite por víctima ni franquicia.
- Periodo de vigencia de la póliza, que deberá alcanzar, al menos, hasta el vigésimo cuarto mes de ejecución del contrato.
- Indicación expresa de que el seguro está al corriente de pago y hasta qué fecha.

Sólo en el caso no poder aportarse el certificado indicado, se justificará el seguro mediante su correspondiente póliza (en la que deberán constar todos los requisitos expuestos para el certificado) y su recibo de pago vigente.

El seguro deberá mantenerse durante toda la duración del contrato, y la adjudicataria justificará su vigencia mediante los recibos de pago cuando sea requerido (en los que deberá especificarse el número de la póliza y el periodo que contempla).

En el caso de que la adjudicataria cambie de póliza de seguro (bien porque cambien los términos, bien porque cambie de compañía aseguradora), deberá aportarse un nuevo certificado en las mismas condiciones indicadas anteriormente, en el momento del cambio.

Se considerará válido el contrato de seguro suscrito con anterioridad por la entidad o entidades prestadoras de la intervención, en el que se hagan constar las coberturas mencionadas para las personas participantes en la misma.

17. PROGRAMA DE TRABAJO.

No hay obligación de presentar un programa de trabajo.

El desarrollo de las fases de ejecución del contrato, recogidas en la cláusula 5 del PPTP, hace innecesaria la presentación de un programa de trabajo.

18. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución se inicia el primer día del mes siguiente al de la firma del contrato, y se extiende durante treinta y un meses:

- La fase de investigación e innovación debe comenzar el primer día del mes siguiente al de la firma del contrato, y su duración es de tres meses. A la misma sigue un mes para la determinación, por el centro directivo promotor del contrato, de la resolución o no del mismo, tal como se recoge en la cláusula 5 del PPTP.
- La fase de intervención debe comenzar, en su caso, no más tarde del primer día del quinto mes desde la firma del contrato, y tendrá una duración máxima de veinticuatro meses, salvo el supuesto recogido en el párrafo anterior.

Recepciones parciales: no procede.

Prórroga del contrato: no procede.

19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La aplicación, por parte de la adjudicataria, de medidas de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres durante la ejecución del contrato, que incluirán al menos, las siguientes:

El uso de un lenguaje inclusivo en los trabajos a entregar y en la documentación utilizada por los equipos de trabajo, sea escrita o audiovisual; y el uso de información desagregada por sexo, siempre que esté disponible en las fuentes correspondientes.

La adjudicataria deberá acreditarlo mediante certificación en la que se recojan las medidas aplicadas, expedida por la persona firmante del contrato, que deberá entregarse al finalizar la ejecución del contrato.

A dicha condición especial de ejecución se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial, de manera que su incumplimiento se considerará causa de resolución conforme el apartado f) del artículo 211 de la LCSP.

Asimismo, las obligaciones recogidas en las cláusulas 33 y 40.3 tendrán la consideración de condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, con el carácter de obligación contractual esencial, a los efectos establecidos en el artículo 211.1.f) de dicha Ley.

20. CRITERIOS SOCIALES DE PREFERENCIA EN CASO DE EMPATE.

El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato establecidos en el apartado 9 de la Cláusula 1 de este pliego, se resolverá mediante la aplicación de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

- a) Las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial.
- b) Las proposiciones presentadas por empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad en un porcentaje superior al 2% además del que les pudiera imponer la normativa en la materia. A efectos de aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social
- c) Las proposiciones presentadas por las empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.

En la aplicación de estos criterios de desempate, tendrá prioridad la proposición de la entidad que reúna más de una característica de las señaladas en los apartados a), b) y c) de esta cláusula.

De subsistir el empate entre varias ofertas tras la aplicación del criterio anterior, se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

1. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla de cada una de las empresas.
2. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
3. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
4. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

La documentación acreditativa de los distintos criterios de desempate será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

21. PENALIDADES.

21.1. POR DEMORA EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL PPTP.

Se impondrá una penalidad de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio de adjudicación, al día, IVA excluido.

21.2. POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192.1 de la LCSP se prevén las siguientes penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso en la prestación de la intervención o incumplimiento de los compromisos o de las condiciones de ejecución del contrato, que serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de estas superar el 50 por cien del precio del contrato.

La base económica de penalización (en adelante BP), será el 50% de la base imponible del precio de adjudicación.

Estas penalidades se harán efectivas mediante deducción de la cantidad que en concepto de pago final deba abonarse al contratista.

1. **Incumplimientos muy graves.** Se impondrá una penalidad del 1,5% de la BP en los siguientes casos:

- 1.1. Por no garantizar la contratación de los medios personales necesarios para la correcta ejecución del contrato.
- 1.2. Por incurrir en las infracciones tipificadas como muy graves en el artículo 72 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
- 1.3. Por incumplir cualquiera de las estipulaciones establecidas en el encargo de tratamiento de datos personales
- 1.4 Por llevar a cabo la intervención con un número de personas inferior al mínimo exigido en la cláusula 2 del PPTP, o inferior al ofertado respecto al criterio de adjudicación 2.1, cuando este sea superior al número máximo exigido en la cláusula 2 del PPTP.

Los incumplimientos que merezcan la calificación de muy graves conllevarán la imposición del doble de la penalidad prevista en el caso de reincidir en el cumplimiento defectuoso en la prestación del servicio o en el incumplimiento de los compromisos o de las condiciones de ejecución del contrato.

2. **Incumplimientos graves.** Se impondrá una penalidad del 0,5% de la BP en los siguientes casos:

- 2.1. Por dar publicidad, en todo en parte, a materias relacionadas con los trabajos de este contrato sin la obligatoria autorización.
- 2.2. Por incurrir en las infracciones tipificadas como graves en el artículo 73 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

3. **Incumplimientos leves:** Se impondrá una penalidad del 0,25% de la BP en los siguientes casos:

- 3.1. Por el incumplimiento de las instrucciones dadas por la persona Responsable del contrato relativas a la correcta ejecución del contrato, o por la ocultación de hechos relevantes que afecten a las personas participantes o a la prestación de la intervención.
- 3.2. Por la obstaculización, por parte de la adjudicataria, de las tareas que efectúe el órgano de contratación con relación a la supervisión y control necesarios para asegurar la adecuada realización de los trabajos contratados.

Los incumplimientos que, de acuerdo con los apartados anteriores, merezcan en principio la calificación de leve o grave serán calificados respectivamente como graves o muy graves en el caso de reincidir en el cumplimiento defectuoso en la prestación de la intervención o en el incumplimiento de los compromisos o de las condiciones de ejecución del contrato.

En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá a la adjudicataria de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la correcta ejecución del contrato.

21.3. POR INFRACCIÓN DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA LA SUBCONTRATACIÓN: por infracción de las condiciones indicadas en el artículo 215.2.b) de la LCSP se podrá imponer una penalidad máxima del 50 por ciento del importe subcontratado, conforme a lo establecido en el artículo 215.3 de la LCSP.

21.4. POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS A LOS SUBCONTRATISTAS O SUMINISTRADORES:

Cuando quede acreditado, mediante resolución judicial o arbitral firme, el impago por la contratista a un subcontratista o suministrador en plazo, si la demora no está motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador, se podrá imponer una penalidad máxima del 5 por ciento del precio del contrato, y podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el límite conjunto del 50 por ciento de dicho precio.

21.5. LA GRADUACIÓN EN LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES se efectuará atendiendo a los siguientes criterios:

- a) Existencia de intencionalidad o reiteración.
- b) Naturaleza de los perjuicios causados.
- c) Gravedad en la afectación del funcionamiento de la intervención.
- d) Grado de incidencia en la adecuada atención a las personas usuarias.
- e) Grado de incumplimiento de los medios personales exigidos.
- f) Reincidencia. En el supuesto de que se hubiera impuesto una penalidad por el mismo concepto en los últimos veinticuatro meses, se impondrá una penalidad de hasta el doble de los importes máximos previstos en el apartado de clasificación de los incumplimientos.

21.6. PROCEDIMIENTO GENERAL DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES.

Para proceder a la imposición de las penalidades indicadas será necesario que los hechos que puedan dar lugar a las mismas queden certificados por la persona Responsable del contrato. De esta certificación se dará traslado a la contratista para que realice las alegaciones oportunas, en el plazo de 10 días hábiles. Toda la documentación recabada será trasladada al órgano de contratación que resolverá sobre la imposición de la penalidad, o en su caso, penalidades.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta de la persona Responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista, conforme a lo dispuesto en el artículo 194.2 de la LCSP.

22. MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO.

No procede.

23. SUBCONTRATACIÓN.

La contratista solo puede subcontratar con terceros la verificación de los resultados prevista en la cláusula 6 del PPTP y la evaluación de los modelos de colaboración e intervención prevista en la cláusula 7 del PPTP, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, quedando obligadas al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP. En todo caso, la contratista asume la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración.

El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación es causa de resolución del contrato.

Si el contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del centro directivo promotor como responsable del tratamiento, indicarán en la oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o servicios asociados a ellos, el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización, conforme al modelo de declaración responsable múltiple que figura como anexo III al presente pliego.

24. RÉGIMEN DE PAGOS.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: no proceden.

Se trata de un contrato de pago por resultados, por lo que este se vincula a la consecución de unos determinados objetivos de impacto social. Por tanto, en lugar de retribuir la prestación de un servicio, se retribuye la consecución del resultado pretendido en cada una de las fases de ejecución del contrato.

Forma de pago: Se establece un régimen de pagos intermedio y final, que se corresponde, respectivamente, con la fase de investigación e innovación y la fase de intervención, según se recoge en la cláusula 5 del PPTP.

24.1. Fase de investigación e innovación.

El centro directivo promotor del contrato analizará si cada entregable correspondiente a esta fase, recogido en la cláusula 5 del PPTP, alcanza los niveles de rendimiento previstos en la misma. En caso afirmativo, el órgano de contratación remunerará a la adjudicataria con el pago máximo de (IVA excluido):

- Diseño del modelo de colaboración: 88.700 €
- Diseño del modelo teórico de intervención: 211.300 €

En caso contrario, la remuneración alcanzará el 25% de cada uno de los pagos indicados, en concepto de retribución por el trabajo realizado (IVA excluido):

- Diseño del modelo de colaboración: 22.175 €
- Diseño del modelo teórico de intervención: 52.825 €

)

24.2. Fase de intervención.

Al tratarse de un pago por resultados, el mismo se difiere hasta la verificación semestral de los mismos, recogida en la cláusula 6 del PPTP. En cada verificación semestral la persona Responsable del contrato analizará la existencia de “casos de éxito principal”, y, en la última verificación, al finalizar la intervención, la existencia de “casos de éxito principal” y de “casos de éxito secundario”. Tras cada verificación, el órgano de contratación remunerará a la adjudicataria con el importe resultante de dicho análisis, teniendo en cuenta las valoraciones siguientes, alineadas con los resultados contenidos en la cláusula 6 del PPTP:

- a) Activación y compromiso de participación: 6.000 €.
- b) Plan de salida autónoma de la situación de sinhogarismo: 3.000 €
- c) Mejora del bienestar auto percibido: 3.000 €
- d) Incremento de ingresos económicos: 6.000€
- e) Vivienda: 24.000 €

Por tanto, cada “caso de éxito principal” conllevará una remuneración total de 42.000 euros, mientras que cada “caso de éxito secundario” conllevará una remuneración que ascenderá al sumatorio de los resultados conseguidos por la persona participante en el momento de la verificación final.

Cada uno de estos resultados no podrá imputarse más de una vez a cada una de las personas participantes, sea como parte de un “caso de éxito principal” o como parte de un “caso de éxito secundario”.

De no existir ningún “caso de éxito principal” ni “caso de éxito secundario”, la adjudicataria no percibirá ninguna remuneración, más allá de la percibida en las fases anteriores a la de la intervención.

Los importes indicados anteriormente son importes máximos (presupuesto de licitación). Para la facturación se aplicarán importes ofertados por el adjudicatario en su oferta.

25. REVISIÓN DE PRECIOS.

No procede.

26. INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE LOS TRABAJADORES DE

LA EMPRESA QUE ESTÁN PRESTANDO SERVICIO EN LA ACTUALIDAD.

No procede.

No obstante, conforme a lo dispuesto en el artículo 308, apartado segundo, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, a la extinción de este contrato no puede producirse la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos que constituyan su objeto como empleados públicos de la Comunidad de Madrid.

27. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN.

3.000,00 euros.

28. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

28.1. CONFIDENCIALIDAD.

En virtud de lo establecido en el artículo 5.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD) y el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), el contratista, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento, se obligan a guardar la máxima reserva y secreto de los datos de carácter personal cuyo acceso se regula en el presente documento, obligándose a la más estricta confidencialidad sobre los mismos, y quedando, igualmente, sujeto a no comunicarlos o cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, excepto que reciba instrucciones expresas del Responsable del tratamiento para ello.

El contratista se compromete a la no divulgación a terceros de cualquier aspecto o detalle de los datos personales o información facilitada por el responsable del tratamiento para la prestación del objeto del contrato, salvo que esta responda a la estricta realización del objeto contractual o al cumplimiento de alguna obligación legal o resolución judicial. La obligación de confidencialidad y secreto subsistirá permanentemente, tanto durante la vigencia de la relación entre las partes como posteriormente tras su finalización, cualquiera que fuese la causa de su extinción.

28.2. PROTECCIÓN DE DATOS.

28.2.1. Normativa.

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el RGPD y LOPDGDD y el Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre.

La contratación implica el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento es Responsable del tratamiento el órgano contratante, por lo que aquel tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este caso el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD.

28.2.2. Tratamiento de datos personales.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el encargado del tratamiento deberá tratar los siguientes datos personales, de los cuales es Responsable del tratamiento el órgano de contratación, en la manera en que se especifica en esta cláusula.

El tratamiento de los datos personales por parte del encargado del tratamiento quedará circunscrito a lo que resulte necesario para llevar a cabo la prestación de servicios encargada por el responsable del tratamiento, y se efectuará siempre en el marco de esta. Por lo tanto, sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades, establecidas en la normativa de aplicación, de la persona responsable del tratamiento mientras que la persona adjudicataria ostenta las establecidas para la persona encargada del tratamiento.

Si el contratista destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerado también como Responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido.

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la modificación de lo estipulado en el tratamiento de datos personales, el contratista lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita en el tratamiento de los datos personales y, en su caso, el órgano de contratación emitirá una adenda de "Tratamiento de datos personales", de modo que la misma siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

Los colectivos de interesados y datos personales de la actividad de tratamiento a los que puede tener acceso el contratista son:

- Actividad de tratamiento: personas usuarias Contrato Impacto Social.
- Colectivos de interesados: personas alojadas en las viviendas incluidas en programas públicos de atención a personas sin hogar.
- Categorías de datos personales que van a ser tratados por el encargado del tratamiento: datos de carácter identificativo, características personales, circunstancias sociales, datos económicos, financieros y de seguros. Datos especialmente protegidos.

El tratamiento consistirá en la realización de las siguientes operaciones por parte del encargado del tratamiento sobre los datos personales:

<input checked="" type="checkbox"/> Registro	<input checked="" type="checkbox"/> Utilización	<input checked="" type="checkbox"/> Organización
<input checked="" type="checkbox"/> Recogida	<input checked="" type="checkbox"/> Destrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación
<input checked="" type="checkbox"/> Supresión	<input checked="" type="checkbox"/> Modificación	<input checked="" type="checkbox"/> Estructuración

Medidas de Seguridad.

Los datos personales han de protegerse empleando las medidas que todo Responsable y encargado del tratamiento diligente deben tomar para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad. De acuerdo con la evaluación de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes:

Las medidas contenidas en el Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, en adelante ENS): Nivel de seguridad MEDIO.

En cualquier caso, las medidas de seguridad que se implementen deberán ajustarse a lo establecido en el Real Decreto vigente por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

28.2.3. Estipulaciones como encargado del tratamiento.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el contratista se obliga y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, reciba del órgano de contratación por escrito en cada momento.

El contratista informará inmediatamente al órgano de contratación si, en su opinión, una instrucción es contraria a la normativa de protección de datos personales aplicable en cada momento.

- b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del contrato. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.

- c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes, para asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales a los que tenga acceso. En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y seguridad

detalladas en esta cláusula, así como a presentar, en su caso, las correspondientes Declaraciones o Certificaciones de Conformidad con el ENS.

- d) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de este Pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposición del órgano contratante dicha documentación acreditativa.
- e) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas a su tratamiento.
- f) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y comunicarlo al órgano contratante también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el contratista como sus representante(s) a efectos de protección de los datos personales (representantes del encargado del tratamiento), Responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de datos personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.
- g) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete a devolver los datos personales a los que haya tenido acceso; los datos personales generados por el contratista por causa del tratamiento; y los soportes y documentos en que cualquiera de estos conste, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. El encargado del tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del tratamiento. En este último caso, los datos personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.
- h) Llevar a cabo el tratamiento de los datos personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que determine el Responsable del tratamiento, equipamiento que podrá estar bajo el control del órgano de contratación o bajo el control directo o indirecto del contratista, u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito por el órgano de contratación y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.
- i) Salvo que se indique otra cosa en esta cláusula o se instruya así expresamente por el órgano de contratación, a tratar los datos personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.
- j) Presentar, antes de la formalización, una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores propios o de terceros y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos).
- k) El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria, en su caso, sobre nuevos subcontratistas.
- l) En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea, el contratista se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos (fuera del ámbito de la Unión o del Espacio Económico Europeo), el contratista informará por escrito al órgano de contratación de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al órgano de contratación salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.
- m) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al órgano de contratación, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 24 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su

sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

- n) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los "Derechos"), ante el encargado del tratamiento, este debe comunicarlo al órgano de contratación con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quién ejerce el derecho. Asistirá al órgano de contratación, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.
- o) Colaborar con el órgano de contratación en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de medidas de seguridad, comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas), de medidas de seguridad a las autoridades competentes o a los interesados, y colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que dispone.
- p) Poner a disposición del órgano de contratación, a requerimiento de este, toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y colaborar en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el órgano de contratación.
- q) En los casos en que la normativa así lo exija (art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD, un registro de todas las actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del órgano de contratación (Responsable del tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo.
- r) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección datos personales y del deber de responsabilidad activa que habrá de poner a disposición del órgano de contratación a requerimiento de esta. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición del órgano de contratación toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.
- s) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el Responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

28.2.4. Subencargos de tratamiento asociados a subcontrataciones.

Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del contrato, y en caso de que el contratista pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a datos personales, el contratista lo pondrá en conocimiento previo del órgano contratante en el plazo mínimo de un mes, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto, para que el órgano de contratación decida si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación.

En caso de obtener la autorización, el subencargado, que también tendrá la condición de Encargado del Tratamiento, está obligado, igualmente, a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el Encargado del Tratamiento y las instrucciones que dicte el órgano de contratación, como Responsable del Tratamiento.

Corresponde al Encargado del Tratamiento exigir por contrato al subencargado el cumplimiento de las mismas obligaciones asumidas por él a través del presente pliego, el cual será puesto a disposición del órgano de contratación a su mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

El contratista informará al órgano de contratación de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros subcontratistas con una antelación de un mes, dando así al órgano de contratación la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula u oponerse a esos cambios. La ausencia de respuesta del órgano de contratación equivale a oponerse a dichos cambios.

En caso de incumplimiento por parte del subencargado, el contratista seguirá siendo plenamente Responsable ante el órgano de contratación en lo referente al cumplimiento de las obligaciones, quedando el órgano de contratación exonerado de cualquier responsabilidad con respecto a las consecuencias derivadas de las actividades del subcontratista.

28.3. INFORMACIÓN.

Los datos de carácter personal de los licitadores y contratista, o en su caso, de sus representantes, serán tratados por el órgano de contratación para ser incorporados a la actividad de tratamiento "Contratación Pública", cuya finalidad es la tramitación, adjudicación de los contratos sujetos a la legislación de contratos del sector público, así como de los contratos de naturaleza patrimonial de las Administraciones Públicas. El responsable de su tratamiento es la D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y siendo los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: protecciondatos-psociales@madrid.org.

La legitimación para el tratamiento de los datos personales de los licitadores o de sus representantes y del contratista se fundamenta en el artículo 6.1.b) del RGPD.

No se comunicarán los datos personales a terceros destinatarios salvo a aquellas entidades o administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y de las obligaciones legales del presente contrato en los términos declarados en el RAT correspondiente.

Los datos serán publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en el perfil de contratante, dispuesto en la página institucional o sede electrónica de la Comunidad de Madrid.

Los datos personales de los licitadores se conservarán durante el plazo de vigencia de la licitación y una vez finalizada esta, hasta la prescripción de responsabilidades. En el caso de los datos personales del contratista, se conservarán mientras sean necesarios para la ejecución del contrato y una vez finalizado, durante los plazos de prescripción de obligaciones legales y tributarias, así como de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación y demás legislación aplicable, sin perjuicio de las obligaciones que pudieran derivarse de la Ley 10/2019, de 10 abril de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid y de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer por registro electrónico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, preferentemente mediante el formulario de solicitud ["Ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales"](#).

Dispone de información adicional en el siguiente enlace: <https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos>

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre el órgano de contratación y el contratista a que hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son retribuíbles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos contractuales, siendo por cuenta del contratista el coste de las actuaciones de cualquier tipo, derivadas del cumplimiento de RGPD y normativa relacionada. Dichas obligaciones y prestaciones tendrán la misma duración que la prestación objeto de este pliego y su contrato, prorrogándose en su caso por periodos iguales a este. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.

29. FORMA DE CONSTATAción POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Según lo dispuesto en los artículos 94 y 95 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el artículo 311 de la LCSP, la Administración a través de la persona Responsable del contrato, puede dar las instrucciones necesarias para su correcto cumplimiento.

30. FORMA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO.

Según lo dispuesto en el artículo 210 de la LCSP, mediante certificado de conformidad expedido por la persona Responsable del contrato.

La recepción de los entregables correspondientes a cada fase, susceptibles de comprobación física, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el Régimen de Control Interno y Contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid (BOCM de 3 de abril) y en la Circular 1/1997, de 26 de junio, de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, por la que se dictan instrucciones sobre la comprobación material del gasto en contratos, convenios y subvenciones (BOCM de 6 de agosto).

31. PLAZO DE GARANTÍA.

No procede.

32. EL CONTRATO CONLLEVA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DEL CONTRATISTA: SÍ.

El contratista actuará como encargado del tratamiento

Finalidad para la que se tratarán los datos personales: Personas usuarias Contrato Impacto Social

33. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH.

1. Las actuaciones que se lleven a cabo respetarán el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio *do no significant harm* - DNSH) en cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C58/01) sobre la aplicación de este principio, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España y su documento Anexo.
2. La adjudicataria garantizará el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio *do no significant harm* - DNSH) y, en su caso, el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
3. En caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, la adjudicataria habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852.
4. En ningún caso podrán llevarse a cabo las actividades que la Comisión Europea declara directamente como no elegibles en su Guía Técnica 2021/C58/01.

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula 2. Régimen jurídico.

El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Estudios y Servicios Técnicos, aprobado por Orden de 8 de marzo de 1972, por las Leyes aprobadas por las Asambleas de Madrid y por el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Será de aplicación al contrato el Plan de medidas antifraude para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, actualizado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 2023. Asimismo, el contrato está sujeto a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato.

Cláusula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los trabajos descritos en el **apartado 1 de la cláusula 1** al mismo y definidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se especifican las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.

Tanto el pliego de prescripciones técnicas particulares como el pliego de cláusulas administrativas particulares revisten carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato

Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, para lo que se estará a lo estipulado en el **apartado 1 de la cláusula 1**. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el número máximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el indicado.

Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el **apartado 4 de la cláusula 1**, distribuido en las anualidades previstas en el mismo, siendo el sistema de determinación del presupuesto el expresado en el citado **apartado 4 de la cláusula 1**. Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que figura como partida independiente.

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica igualmente en el **apartado 4 de la cláusula 1**.

Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitación, serán desechadas. El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicación, dará lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

La ejecución del servicio está amparada por los créditos que se indican en el **apartado 4 de la cláusula 1**.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedará sometido a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, así como a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de programación 2021-2027.

Cláusula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en la siguiente dirección de Internet (URL): <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>.

CAPÍTULO III. LICITACIÓN

Cláusula 6. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas.

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o su clasificación de conformidad con lo establecido en el **apartado 7 de la cláusula 1**.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, se especifica en el **apartado 6 de la cláusula 1**.

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir, además, los requisitos establecidos en el artículo 68 de la LCSP.

Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios de adjudicación, en aplicación de los artículos 131.2, 145, y 156.1 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si así se indica en el **apartado 8 de la cláusula 1** de este pliego, para la adjudicación del contrato se celebrará una **subasta electrónica**, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 143 de la LCSP. En el **apartado 13 de la cláusula 1** se incluye la información necesaria sobre su celebración.

Cláusula 8. Criterios objetivos de adjudicación.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los establecidos, con su correspondiente ponderación o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el **apartado 9 de la cláusula 1**.

Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de adjudicación, en el mismo apartado de dicha cláusula se especifican, en su caso, los que se valorarán en una primera fase, siendo necesario obtener como mínimo, en cada uno de ellos la puntuación que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente se señalarán, en su caso, en este apartado, los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor tengan atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, la valoración de aquéllos corresponderá bien a un comité formado por expertos en la materia objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estará compuesto por un mínimo de tres miembros, que podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero, en ningún caso, podrán estar adscritos al órgano proponente del contrato al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas. Su designación o el procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designación del organismo técnico especializado se establece en el **apartado 9 de la cláusula 1**, debiendo publicarse con carácter previo a la apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

Cuando en el apartado 1 de la cláusula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevará a cabo una evaluación comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de lotes cumplirían mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Cláusula 9. Garantía provisional.

Como se especifica en el **apartado 11 de la cláusula 1**, para tomar parte en la licitación, los licitadores no deberán constituir previamente, a disposición del órgano de contratación, una garantía provisional.

Cláusula 10. Presentación de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte de la Administración contratante.

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación, y en la forma establecida en este pliego.

En el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>) se ofrecerá la información relativa a la convocatoria de licitación de este contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares, y documentación complementaria, en su caso y el enlace a la información sobre el sistema de licitación electrónica que debe utilizarse.

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria con una antelación de 12 días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará seis días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el perfil de contratante.

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes y subasta electrónica si se prevén en la cláusula 1. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el **apartado 12 de la cláusula 1**.

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas particulares que rigen el presente contrato, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

Los datos de carácter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus representantes y personal, serán tratados por el centro directivo promotor del contrato en la actividad de tratamiento "CONTRATACIÓN", cuya finalidad es la tramitación, adjudicación y ejecución de los contratos. La legitimación para el tratamiento de esos datos personales se fundamenta en el artículo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicarán los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y de las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda serán publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y, por interconexión, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer por registro electrónico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, preferentemente mediante el “Formulario para el ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales”, que está disponible en la dirección de Internet: <https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion/proteccion-datos-mis-derechos-su-ejercicio> donde además se ofrece información adicional sobre esta materia.

Cláusula 11. Medios electrónicos.

La utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la presentación de proposiciones será obligatoria cuando así se indique en el **apartado 13 de la cláusula 1**.

En el mismo apartado se indica el portal informático donde, en su caso, se puede acceder a los programas y la información necesaria para licitar por medios electrónicos.

Si se exige la presentación electrónica de las ofertas, los licitadores aportarán sus documentos firmados electrónicamente. Los certificados de firma electrónica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los prestadores de servicios electrónicos de confianza cualificados (<https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/>) y no estar vencidos, suspendidos o revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato electrónico porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportarán copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratación tendrán eficacia exclusivamente en el ámbito de la actividad contractual de esta Administración Pública Autonómica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el órgano de contratación podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la información original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibición de contratar conforme al artículo 71.1 e) de la LCSP.

El órgano de contratación recabará de otros órganos y registros de las Administraciones y entidades públicas la consulta y transmisión electrónica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposición expresa, en los términos del modelo que figura como **anexo III** de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telemáticas.

Aún en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrónicos, para las restantes comunicaciones, notificaciones y envíos documentales, los interesados se relacionarán con el órgano de contratación por medios electrónicos.

Para la práctica de las notificaciones, el órgano de contratación utilizará el sistema de notificaciones electrónicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la Carpeta Ciudadana (<https://gestion7.madrid.org/carpetaciudadana/>), para lo cual la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablón de anuncios electrónico

Se comunicarán a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitación, y las ofertas con valores anormales mediante su publicación en el tablón de anuncios electrónico, incluido en la ficha de la correspondiente contratación publicada en el Portal de la Contratación Pública, sección Perfil de contratante (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante>).

Adicionalmente, se notificarán de forma individual por medios electrónicos a los interesados afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del órgano de contratación, que impliquen la posible subsanación de defectos u omisiones en la documentación presentada o determinen la exclusión de candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la notificación de las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior se computarán desde la fecha de envío de la notificación electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.

Por su parte, la publicación en el tablón de anuncios electrónico de la existencia de ofertas que pueden ser consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgación y conocimiento de todos los licitadores, ya que esta circunstancia amplía el plazo máximo para adjudicar el contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se efectuará, mediante notificación electrónica individual, el requerimiento a cada licitador que haya presentado una oferta incurso en presunción de anormalidad, para tramitar el procedimiento previsto en el artículo 149 de la de la misma Ley, tal y como establece la cláusula relativa a la actuación de la mesa de contratación, computándose en este caso los plazos desde la recepción de la notificación por el interesado.

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren abiertos en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente expediente a través de la Carpeta Ciudadana (<https://gestion7.madrid.org/carpetaciudadana/>), en la opción "Situación de expedientes". También existe la posibilidad de utilizar un formulario genérico de solicitud <https://sede.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica>) para presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier órgano de la Comunidad de Madrid.

Cláusula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones y la documentación que las acompaña se presentarán redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constarán de **dos (2) sobres**.

A) Sobre nº 1. Documentación administrativa.

B) Sobre nº 2. Proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas.

Los licitadores deberán indicar la documentación o información aportada a la licitación que tenga carácter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores. El carácter confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la proposición, pudiendo afectar únicamente a los documentos que tengan una difusión restringida y, en ningún caso, a documentos que sean públicamente accesibles.

En los sobres se deberá incluir la documentación que a continuación se indica:

A) SOBRE Nº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" que incluirá, preceptivamente, los siguientes documentos.

1. Declaración responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de contratación, conforme al formulario normalizado del "**documento europeo único de contratación**" (DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, según se recoge en el **anexo II** al presente pliego.

El servicio en línea gratuito DEUC electrónico permite cumplimentar este documento por vía electrónica en la siguiente dirección de Internet: <https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es> conforme se indica a continuación:

- Con el servicio DEUC electrónico, el órgano de contratación creará un modelo de DEUC para este procedimiento, que se pondrá a disposición de los licitadores en formato normalizado XML, junto con los demás documentos de la convocatoria (como documentación complementaria) en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.
- El licitador deberá almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y acceder después al servicio DEUC electrónico, donde deberá importarlo, cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y almacenarlo en su equipo en formato electrónico, firmarlo (electrónicamente en el supuesto de licitación electrónica) y presentar el DEUC con los demás documentos de la licitación. En el **anexo II** se incluyen unas orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado del DEUC.

Si varios empresarios concurren constituyendo una unión temporal, cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno de ellos un formulario DEUC separado, así como el resto de los documentos exigidos en este apartado de la presente cláusula,

debiendo acompañar asimismo un escrito de compromiso en el que indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que se agrupan, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y la designación de un representante o apoderado único de la unión, que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de la misma frente a la Administración. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar solvencia, deberá también aportar el DEUC separado de dicha/s entidad/es.

Si el contrato está dividido en lotes y los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigidos varían de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público lo indicarán en el propio formulario del DEUC y, si alguno de los datos o informaciones requeridos no consta en el Registro o no figuran actualizados, los aportarán mediante la cumplimentación del citado formulario.

No obstante, el órgano o la mesa de contratación, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento, podrán recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que los licitadores presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración.

2. Declaración responsable múltiple.

Declaración responsable múltiple, conforme al modelo que figura como **anexo III** al presente pliego.

B) SOBRE Nº 2. "PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS". Este sobre contendrá:

1. La proposición económica, según el modelo establecido en el **anexo I de este Pliego.**

No se aceptarán proposiciones económicas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta debiendo incluir, en su caso, el desglose de costes exigido en el **apartado 9 de la cláusula 1**. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

2. La documentación que se especifica en el **apartado 10 de la cláusula 1 al presente pliego, en orden a la aplicación de los demás criterios de adjudicación valorables de forma automática por aplicación de fórmulas. (**ANEXO IV**, así como su documentación justificativa).**

Cláusula 13. Actuación de la Mesa de contratación.

Una vez conocidos los participantes en el procedimiento de contratación, se realizará el análisis *ex ante* de riesgo de conflicto de interés mediante la herramienta informática de *data mining* MINERVA, con sede en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en los términos de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, dictada en aplicación de la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Si la AEAT no dispone de información de la titularidad real de alguna empresa objeto de consulta, el órgano de contratación solicitará dicha información a esa empresa, la cual deberá aportarla en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud, siendo motivo de exclusión del procedimiento la falta de entrega de la información en el plazo señalado.

A tal efecto, se requerirá la aportación de la declaración de titularidad real que haya sido presentada junto a las últimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, según el modelo TR de la Orden JUS/616/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, o según los modelos y formatos electrónicos aplicables con anterioridad a la vigencia de dicha orden ministerial según la fecha de

depósito. Si se trata de contratistas no sujetos a la obligación de presentación en el Registro Mercantil, se aportará una declaración con el mismo contenido que el del modelo TR de la Orden JUS/616/2022.

Finalizado el plazo de admisión de proposiciones, se constituirá la Mesa de contratación, con objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentación administrativa. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los interesados, a través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, se notificarán de forma individual por medios electrónicos a los interesados afectados, concediéndose un plazo de tres días naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen.

Una vez examinada la documentación aportada, la Mesa determinará las empresas admitidas a licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo, según proceda. Estas circunstancias se publicarán en el tablón de anuncios electrónico. Adicionalmente, se notificarán de forma individual por medios electrónicos a los interesados afectados.

Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la notificación de las actuaciones a que se refieren los párrafos anteriores se computarán desde la fecha de envío de la notificación electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.

En acto público, se abrirá el sobre nº 2 “Proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas”, dando lectura a las ofertas, de las empresas admitidas, y, en su caso, a la documentación relativa a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas.

Si se identificase alguna proposición que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el **apartado 9 de la cláusula 1**, se realizará la tramitación prevista en el artículo 149 de la LCSP. En caso de subasta electrónica esta tramitación se llevará a cabo tras la finalización de la subasta, tomando en consideración para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la última puja de cada licitador.

Si se produce empate entre dos o más ofertas, se solicitará de los licitadores afectados la documentación acreditativa de los criterios de desempate indicados en la **cláusula 17**.

La mesa de contratación clasificará las proposiciones presentadas por orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicación, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes, para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación.

Si el contrato está sujeto a regulación armonizada, si se apreciase indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se seguirá el procedimiento establecido al respecto en el artículo 150 de la LCSP.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Economía, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, a través de la Subdirección General de Defensa de la Competencia y Unidad de Mercado, ostenta la condición de autoridad de competencia autonómica, siendo este el órgano al que habría que solicitar el informe regulado en el artículo 150 de la LCSP. Además, esa Dirección General ha publicado la *Guía para la detección de indicios de colusión en la contratación pública*, dirigida a los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid, que está disponible en la siguiente dirección de Internet (URL): <https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-0#contratacion-publica-competencia>

Cláusula 14. Garantía definitiva.

Según lo previsto en el **apartado 14 de la cláusula 1**, este contrato está exento de constituir garantía definitiva.

Cláusula 15. Acreditación de la capacidad para contratar.

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes recabarán de otros órganos y registros de las Administraciones y entidades públicas la consulta y transmisión electrónica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el

interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, salvo que conste su oposición expresa, conforme al modelo de declaración responsable múltiple que figura como **anexo III** a este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitará al interesado su aportación. No obstante, no podrá oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Asimismo, requerirá, en su caso, al licitador, la presentación por medios electrónicos, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos que se indican a continuación:

1. Capacidad de obrar.

- 1.1.** Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación.

El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los datos del número de identificación fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá presentar dicho documento.

- 1.2.** Si se trata de empresario individual, el órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.
- 1.3.** Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos.

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

- 1.4.** Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberán acompañar el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68.1 de la LCSP.

- 1.5.** Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el **apartado 6 de la cláusula 1**.

2. Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los datos del DNI de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación, salvo que conste oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulación, requisito sin el cual no se iniciará la actuación administrativa, según lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestión, liquidación y recaudación de la tasa por bastanteo de documentos.

3. Documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El órgano de contratación consultará por medios electrónicos que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:

Obligaciones tributarias:

- a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida al ejercicio corriente, o el último recibo completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las excepciones establecidas en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

- b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en materia de Seguridad Social, contenidas en la disposición adicional decimoquinta y en la disposición transitoria quinta.3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aquéllos deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Previsión Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable.

Además, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la **Comunidad de Madrid**, no deberán tener deudas en período ejecutivo de pago con la Administración autonómica, salvo que estuviesen garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de dichas deudas se aportará de oficio por la Administración Autonómica.

4. Documentación acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y hombres.

El órgano de contratación podrá consultar por medios electrónicos en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente, la efectiva inscripción del plan de igualdad de la empresa, salvo que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá presentar el certificado de inscripción en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripción de su plan de igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentación preceptiva para ello y que han transcurrido tres meses sin haber recibido notificación de decisión alguna sobre la misma, se le podrá requerir para que lo acredite mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el documento que demuestre en qué fecha presentó la solicitud de inscripción de su plan de igualdad, acompañado de un certificado del citado registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este último, de la solicitud de tal certificado en la que figure su fecha de presentación en el mismo.

5. Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Las empresas podrán acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, si así se indica en el **apartado 7 de la cláusula 1**, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación, y que se establecen en dicho apartado.

Si la empresa opta por acreditar su solvencia mediante su clasificación y se encuentra pendiente de obtenerla, deberá aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo establecido en la **cláusula 13** del presente pliego para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, deberán presentar la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica o profesional que se exija por el órgano de contratación en el **apartado 7 de la cláusula 1**, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.4 de la LCSP, se podrá exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma.

Si en el presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos mínimos para su acreditación, los licitadores o candidatos acreditarán su solvencia económica y financiera y técnica o profesional por los criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación establecidos en los artículos 87 y 90 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberá aportar la documentación referida en los apartados anteriores de dichas empresas, así como el compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la ejecución del contrato de la solvencia y medios declarados.

6. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, el certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentación en las convocatorias de contratación de la documentación correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, así como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberá aportar la documentación requerida en esta cláusula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la específicamente exigida por la Administración de la Comunidad de Madrid.

No será preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripción, sustituyéndose su presentación por el acceso de los órganos y mesas de contratación al mismo por medios electrónicos.

Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

7. Justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitación, en su caso.

8. En su caso, deberá aportar la documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP.

9. Si procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitación electrónica.

10. Si el licitador que ha presentado la oferta más ventajosa se comprometió a la contratación de personas en situación de exclusión social, deberá presentar: informes de los servicios sociales públicos competentes acreditativos de dicha situación, contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.

11. Declaración de Compromiso de cumplimiento de principios transversales, ajustada al modelo del Anexo V de este pliego.

12. Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés, ajustada al modelo del anexo VI de este pliego.

13. Declaración de Cesión y tratamiento de datos, ajustada al modelo del anexo VII de este pliego.

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos.

Los licitadores podrán ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de prohibición de contratar prevista en el artículo 71.1 e) de la LCSP, con los efectos establecidos en el artículo 73, si la

información contenida en el DEUC se ha falseado gravemente, se ha ocultado o no puede completarse con documentos justificativos.

Cláusula 16. Propuesta de adjudicación.

La Mesa de contratación calificará, cuando proceda, la documentación aportada y, si observa defectos u omisiones subsanables, se lo comunicará al interesado a través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, se notificarán de forma individual por medios electrónicos a los interesados afectados, concediéndose un plazo de tres días naturales para que el licitador los corrija o subsane. Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la notificación de las actuaciones anteriores se computarán desde la fecha de envío de la notificación electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.

Si el licitador no presenta la documentación requerida en el plazo señalado, si no la subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se entenderá que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 a) de la LCSP, asimismo, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratación propondrá al órgano de contratación la adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditación de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentación de la documentación correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratación elevará al órgano de contratación las ofertas, junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el **apartado 9 de la cláusula 1**.

La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPÍTULO IV. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN

Cláusula 17. Adjudicación del contrato.

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la mejor oferta, mediante la aplicación de los criterios objetivos establecidos en el **apartado 9 de la cláusula 1**, o declarará desierta la licitación cuando no exista ninguna proposición admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicación.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unión temporal de empresas, está obligada a acreditar su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

El contrato se adjudicará en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119.2 b) de la LCSP para los expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliará en quince días hábiles cuando se aprecien ofertas anormalmente bajas.

Cláusula 18. Seguros.

El contratista estará obligado a suscribir con compañías aseguradoras, las pólizas de seguros que se indican en el **apartado 16 de la cláusula 1**, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalización del contrato, por el órgano de contratación.

Cláusula 19. Perfección y formalización del contrato.

El contrato se perfeccionará mediante la formalización en documento administrativo, que no podrá efectuarse antes de que transcurran DIEZ días NATURALES desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación.

En este supuesto, el órgano de contratación, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato, o se

hubiera levantado la suspensión, requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

En el resto de supuestos, el contrato deberá formalizarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de adjudicación a los licitadores.

En los contratos en que proceda, el adjudicatario deberá acreditar previamente, ante el órgano de contratación, la suscripción de las pólizas que se indican en el **apartado 16 de la cláusula 1**, la constitución de la UTE, así como la declaración responsable relativa al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, indicada en la **cláusula 33**.

Asimismo, si la ejecución del contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del centro directivo promotor como responsable del tratamiento, el contratista deberá presentar, antes de la formalización del contrato, una declaración responsable, conforme al modelo que figura como anexo VIII al presente pliego, en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a ellos, según lo indicado en la **cláusula 40**.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, e incurrirá en la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización.

Si, antes de la formalización, el órgano de contratación decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificará a los licitadores compensándoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificación de su valoración económica.

CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 20. Principio de riesgo y ventura.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto por el artículo 197 de la LCSP.

Cláusula 21. Programa de trabajo.

Según se determina el **apartado 17 de la cláusula 1**, no hay obligación de presentar programa de trabajo.

Cláusula 22. Dirección de los trabajos.

La dirección de los trabajos corresponde al responsable del contrato o, en su defecto, a los servicios dependientes del órgano de contratación.

Son funciones del responsable del contrato:

- a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.
- b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la ejecución del contrato en cada una de sus fases.
- c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
- d) Proponer las modificaciones que convenga introducir.
- e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.
- f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.
- g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los trabajos y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la empresa adjudicataria, asistida

de aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del contrato.

Cláusula 23. Plazo de ejecución.

El plazo total y los parciales de ejecución de los trabajos a que se refiere este pliego serán los que figuran en el **apartado 18 de la cláusula 1** o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo, en su caso.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El cómputo del plazo para la ejecución del contrato se iniciará el día siguiente al de la formalización de aquél, salvo que se establezca otra cosa en el **apartado 18 de la cláusula 1**.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

Cláusula 24. Prórroga del contrato.

Como se indica en el **apartado 18 de la cláusula 1** para este contrato no está prevista la prórroga.

Cláusula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si los trabajos sufriesen un retraso en su ejecución y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concederá por el órgano de contratación un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, para lo que se estará al **apartado 18 de la cláusula 1**, la Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administración, en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se determinan en el **apartado 21 de la cláusula 1**.

Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que el responsable del contrato o los representantes de la Administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato o, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, la Administración podrá imponer al contratista las penalidades indicadas en el **apartado 21 de la cláusula 1**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.1 de la LCSP.

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 215.3 de la LCSP podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento

jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se especifican en el **apartado 21 de la cláusula 1**.

Cláusula 26. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP.

Igualmente, el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por errores u omisiones o métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Cláusula 27. Modificación del contrato.

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés público, modificaciones en el en el mismo en los casos y en la forma previstos en la Subsección 4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del libro II, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, justificándolo debidamente en el expediente.

Cuando la determinación del precio del contrato se haya realizado con precios unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a ejecutar hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato, sin que sea preciso tramitar expediente de modificación.

En el **apartado 22 de la cláusula 1** se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los límites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el **apartado 22 de la cláusula 1** sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución, se publicarán en el Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante, y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.

Cláusula 28. Suspensión del contrato.

La Administración podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la LCSP. Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

Cláusula 29. Cesión del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP.

Cláusula 30. Subcontratación.

El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los

subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215.4 de la LCSP.

El contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie su ejecución, su intención de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectará y la identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibición de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista.

Si así se requiere en el **apartado 23 de la cláusula 1**, los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realización, conforme al modelo de declaración responsable múltiple que figura como anexo III al presente pliego. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por la Administración o situación de emergencia justificada, excepto si la Administración notifica en ese plazo su oposición.

Si el contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del centro directivo promotor como responsable del tratamiento, los licitadores deberán indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

Cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato deberá ser notificada por escrito al órgano de contratación, así como toda la información precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones o la autorización que se otorgue no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el **apartado 21 de la cláusula 1** respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Si se trata de un servicio o lote/s del mismo reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y Empresas de Inserción, no se podrá subcontratar con empresas no beneficiarias del derecho de reserva, salvo en las prestaciones accesorias al objeto principal del contrato, conforme a lo establecido, en su caso, en el **apartado 23 de la cláusula 1**.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecución.

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, a los derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este respecto el artículo 1110 del Código Civil.

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPÍTULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cláusula 31. Abonos y relaciones valoradas.

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos que realmente ejecute con sujeción al contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la Administración, a través del responsable del contrato, en su caso, siendo la forma de pago y su periodicidad las especificadas en el **apartado 24 de la cláusula 1**.

La demora en el pago por plazo superior a treinta días, desde la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, devengará a favor del contratista los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP.

Para que se inicie el cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura en el registro del órgano de contratación en el plazo de treinta días desde la fecha de prestación del servicio objeto del contrato. Si el contratista incumpliese este plazo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

La Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.

El responsable del contrato, a la vista de los trabajos realmente ejecutados y de los precios contratados, redactará las correspondientes valoraciones. Las valoraciones se efectuarán siempre al origen, concretándose los trabajos realizados en el período de tiempo de que se trate, observándose, en cuanto a la audiencia del contratista, lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP.

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expedirán tomando como base la valoración correspondiente y se tramitarán por el representante del órgano de contratación dentro de los diez días siguientes al período de tiempo a que correspondan, no pudiendo omitirse la redacción de la valoración por el hecho de que, en algún período, la prestación realizada haya sido de escaso volumen e incluso nula, a menos que se hubiese acordado la suspensión del contrato.

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El contratista, en la forma indicada en el **apartado 24 de la cláusula 1**, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir a la iniciación del contrato abonos a cuenta para la financiación de las operaciones preparatorias para la ejecución del mismo, como instalaciones y adquisición de equipo y medios auxiliares.

Los referidos pagos serán asegurados mediante la prestación de la garantía que se especifica en el **apartado 24 de la cláusula 1**. Los criterios y la forma de valoración de las operaciones preparatorias, así como el plan de amortización de los abonos a cuenta se encuentran recogidos en el mencionado apartado.

En el supuesto de valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega parcial de los mismos, a que se refiere el artículo 200 del RGLCAP, se estará a lo dispuesto en el **apartado 24 de la cláusula 1**.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los contratistas podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administración conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboración con varias entidades financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener información completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la transmisión de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid: <https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-reguladoras-seleccion-entidades-financieras-colaboradoras-servicios-recaudacion>.

Cláusula 32. Revisión de precios.

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el **apartado 25 de la cláusula 1**, todo ello de conformidad con los artículos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP y Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

Cláusula 33. Obligaciones, gastos, impuestos y responsabilidades exigibles al contratista.

Cuando, en función del objeto del contrato, resulte obligatorio aplicar lo dispuesto en el artículo 130 de la LCSP, en el **apartado 26 de la cláusula 1** se especificará la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores de la empresa que están prestando servicio en la actualidad. Asimismo, y a estos efectos, el contratista deberá proporcionar al órgano de contratación, a requerimiento de éste y antes de la finalización del contrato, la citada información. En todo caso, en los citados supuestos, tres meses antes de la finalización del contrato, junto con la certificación del mes que corresponda a dicho período, y con la última certificación que se emita, el contratista deberá presentar certificaciones positivas actualizadas a dichas fechas, acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o acreditar documentalmente que están satisfechas las cuotas a la Seguridad Social correspondientes al personal adscrito a la ejecución del contrato, salvo que el contratista haya autorizado a la Comunidad de Madrid a utilizar medios electrónicos para realizar la consulta electrónica *on-line*, mediante la aplicación ICDA (Intercambio de Datos entre Administraciones), de que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

En el supuesto de que, una vez producida la subrogación, los costes laborales fueran superiores a los que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista.

En todo caso, el contratista deberá responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que, en ningún caso, dicha obligación corresponda a este último. En este supuesto, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, la Administración procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva, en tanto no se acredite el abono de éstos.

En los contratos que impliquen contacto habitual con menores, el adjudicatario deberá aportar, antes de la formalización del contrato, una declaración responsable de que todo el personal al que corresponde la realización de estas actividades (incluido el voluntario, en su caso) cumple el requisito previsto en el artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, relativo a no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexuales, tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, así como por cualquier delito de trata de seres humanos, tipificado en el título VII bis del Código Penal. A tal efecto, el citado personal deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, regulado por el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre. Asimismo, el contratista queda obligado a la inmediata sustitución de aquellos empleados que puedan quedar afectados de manera sobrevenida por el incumplimiento de esta obligación.

Estas obligaciones tendrán la consideración de condición especial en relación con la ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, con el carácter de obligación contractual esencial, a los efectos establecidos en el artículo 211.1.f) de dicha Ley, conforme a lo dispuesto en la cláusula 43 del presente pliego.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan para la ejecución del contrato. Asimismo, el contratista quedará obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecución del objeto del contrato ante el registro del órgano de contratación, a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitación. En la factura deberá constar la identificación del órgano gestor (órgano de contratación), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (órgano que tiene atribuida la función de contabilidad), con indicación de los correspondientes códigos de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, conforme se recoge en el **apartado de “Órganos administrativos” de la cláusula 1**.

Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que estime convenientes el órgano de contratación, según lo establecido en el **apartado 16 de la cláusula 1**.

A los efectos de subsanación de errores y corrección de deficiencias, indemnizaciones y responsabilidades por defectos o errores de los proyectos de obras, se estará a lo dispuesto en los artículos 314 y 315 de la LCSP.

Asimismo, en los contratos que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía, el contratista estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica fijada.
- b) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración.
- c) Entregar, en su caso, las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio y la Administración no decidiese la resolución del contrato, podrá acordar su secuestro o intervención hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente la haya ocasionado. La Administración conservará los poderes de policía precisos para asegurar la buena marcha del servicio.

Será obligación del contratista sobre conservación de documentos establecida en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión: mantener un registro y conservar los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operación. Este período será de tres años si la financiación es de un importe inferior o igual a 60.000 euros. Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de reclamaciones relativas a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude se conservarán hasta que dichas auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan concluido.

Asimismo, en los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se incluirá entre las obligaciones del contratista el cumplimiento de las exigencias establecidas, en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas o documento equivalente en materia de etiquetado verde y etiquetado digital, así como las asumidas por la aplicación del principio de no causar un daño significativo y las consecuencias en caso de incumplimiento.

Cláusula 34. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración responsable que se cita en la cláusula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o en todo caso antes de la devolución de la garantía definitiva. La acreditación de dicho cumplimiento se efectuará mediante la presentación ante el órgano de contratación de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cláusula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

Durante la ejecución del contrato, el contratista ha de cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el Anexo V de la LCSP, así como al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como las que se promulguen durante la ejecución del contrato.

Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre protección y condiciones de trabajo vigentes en la Comunidad de Madrid para la ejecución del contrato en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, calle Ventura Rodríguez, 7 plantas 2ª y 6ª, 28008 - Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electrónico: irsst@madrid.org.

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones relativas a la protección del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guía General de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Información General del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/informacion-general/obligaciones-medioambientales>.

En el modelo de proposición económica que figura como **anexo I** al presente pliego se hará manifestación expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista deberá respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos sectoriales que les sean de aplicación. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

CAPÍTULO VII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 36. Forma de presentación.

El adjudicatario, si procede, queda obligado a presentar los ejemplares completos del trabajo objeto del contrato que se determinan en el pliego de prescripciones técnicas particulares, con el formato y dimensión de los documentos y planos, en su caso, que se determinan en las especificaciones de dicho pliego.

En los contratos cuyo objeto consista en la elaboración de proyectos técnicos, el adjudicatario estará obligado a presentar aquéllos en el formato electrónico que se indique en el citado pliego.

Cláusula 37. Entrega de los trabajos y realización de los servicios.

El contratista deberá entregar los trabajos dentro del plazo estipulado, efectuándose por el representante del órgano de contratación, en su caso, un examen de la documentación presentada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas propondrá que se lleve a cabo la recepción.

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, dará por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas.

Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones formuladas por el representante del órgano de contratación, éste la elevará, con su informe, al órgano de contratación, que resolverá sobre el particular.

Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del representante del órgano de contratación se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir o remediar los defectos observados.

La forma de constatación de la correcta ejecución de la prestación por parte de la Administración se especifica, en su caso, en el **apartado 29 de la cláusula 1**.

A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del organismo contratante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.2 de la LCSP.

Cláusula 38. Cumplimiento del contrato y recepción del servicio.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de vigencia total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración la totalidad de su objeto.

Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula anterior, si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se procederá mediante acto formal a su recepción, que tendrá lugar dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato, levantándose al efecto el acta correspondiente. La forma de recepción del contrato se determina, en su caso, en el **apartado 30 de la cláusula 1**.

Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobación de la inversión.

Hasta que tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de la prestación objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que el responsable del contrato lo haya examinado o reconocido durante su elaboración, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Si la prestación del contratista no reúne las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, levantándose entonces el acta correspondiente. El incumplimiento de las instrucciones sin motivo justificado será causa de resolución, con los efectos que legalmente procedan.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento del plazo inicialmente previsto o las prórrogas acordadas, sin perjuicio de la prerrogativa de la Administración de depurar la responsabilidad del contratista por cualquier eventual incumplimiento detectado con posterioridad.

Cláusula 39. Liquidación del contrato.

Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad del contrato la Administración deberá acordar y notificar al contratista la liquidación del contrato y abonarle, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si el órgano de contratación recibe la factura con posterioridad a la fecha del documento que acredite la recepción o conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, el plazo de treinta días se contará desde que el contratista presente la citada factura en el registro de dicho órgano, en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Cláusula 40. Propiedad de los trabajos, confidencialidad y protección de datos de carácter personal.

1. Propiedad de los trabajos.

Todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del contrato serán propiedad de la Comunidad de Madrid quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación.

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste será cedido por el contratista a la Administración contratante.

2. Confidencialidad.

Con carácter general, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que se tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se hubiese dado dicho carácter por el centro directivo promotor, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal y estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución, durante un plazo cinco años.

El contratista adquiere el compromiso de custodiar la documentación que se le entregue para la realización del contrato y la obligación de que ni la documentación ni la información en ella contenida o a la que acceda como consecuencia de la ejecución del contrato llegue a poder de terceras personas. En consecuencia, el contratista habrá de impartir las instrucciones oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte informático, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en la que se desarrollen sus actividades.

La Administración no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios designada por ellos como confidencial y acordada así por el órgano de contratación.

3. Protección de datos de carácter personal.

El contratista está obligado a respetar y cumplir la normativa vigente nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos personales y, en concreto, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), especialmente lo indicado en sus artículos 5, 28 y 33, y en el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cuanto no se oponga o resulte incompatible con lo dispuesto en el mencionado RGPD y en la LOPDGDD.

Esta obligación será condición especial de ejecución del contrato, con el carácter de obligación contractual esencial, cuyo incumplimiento será causa de resolución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211.1.f) de la LCSP.

Las obligaciones en materia de protección de datos personales tendrán validez durante la vigencia del contrato y una vez terminado este.

Si se produjera el incumplimiento de las citadas obligaciones, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se causen a la Administración contratante, incluido el importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran serle impuestas.

Cláusula 41. Plazo de garantía.

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de recepción y será el establecido en el **apartado 31 de la cláusula 1**.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado la denuncia a que se refiere el apartado anterior, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 y 315 de la LCSP.

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

Cláusula 42. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía que, en su caso, se determina en el **apartado 31 de la cláusula 1**, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución de aquella o de cancelación del aval, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del RGPCPM.

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducirá a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado en el **apartado 18 de la cláusula 1** respecto de la cancelación parcial de la garantía.

Cláusula 43. Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 313 de la LCSP, así como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la **cláusula 25**.
- El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter confidencial respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, que se indican en el **apartado 28 de la cláusula 1**.
- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sanción muy grave, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2.1 de dicha Ley.
- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato indicadas en este pliego.

Asimismo, en los contratos que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía, serán causa de resolución del contrato las indicadas en el artículo 294.b), c) y d) de la LCSP.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duración máxima y el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en los expedientes de resolución contractual será de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, el procedimiento se considerará desestimado si se ha iniciado a instancia del contratista o se producirá su caducidad si ha sido iniciado de oficio.

Cláusula 44. Prerrogativas de la Administración, revisión de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del pliego, este contrato tiene carácter administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia

del mismo sobre su interpretación, modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la LCSP, si el contrato tiene un valor estimado superior a 100.000 euros, serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los anuncios de licitación, los pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, la adjudicación y los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. A estos efectos se consideran actos de trámite los acuerdos de admisión o exclusión de licitadores o la admisión o exclusión de ofertas. También son susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos dictados en relación con las modificaciones contractuales que incumplan lo dispuesto en los artículos 204 y 205 de la LCSP.

El recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo, pudiendo presentarse el escrito de interposición en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o del competente para la resolución, en el plazo de diez días naturales computados conforme a lo dispuesto en el artículo 50.1 de la LCSP, o en el plazo previsto en el artículo 50.2 cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad enumeradas en él.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados específicamente en el párrafo anterior, deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible.

La resolución dictada será directamente ejecutiva y solo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44 de la LCSP podrán ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Madrid a fecha de firma

<p>Conforme EL CONTRATISTA (El contratista dará conformidad a los pliegos en el acto de firma del contrato en el que se hará referencia inequívoca al nº CSV que aparece en el lateral de los mismos)</p>	<p>Por la Administración LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES (P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de 22/12/2023) EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN Firmado digitalmente por: LÓPEZ SANTOS OSCAR Fecha: 2026.05.04 08:54</p>
--	---

ANEXO I PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Nombre y apellidos de la/s persona/s que firma/n la oferta				DNI/NIE
D.Dª <representante>				<DNI>
D.Dª <representante>				<DNI>
Actuando en nombre propio o en representación de (nombre y apellidos/razón social del licitador)				NIF
<licitador>				<NIF>
Con domicilio en (domicilio del licitador)				
Vía / número <dirección>				
Localidad <municipio>				
Consultado el anuncio de licitación del contrato:				
Expediente: 049/2026 - "Experimentación del contrato de impacto social como instrumento de financiación de los servicios sociales, para prevenir la cronificación de las situaciones de sinhogarismo, cofinanciado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATIONEU"				
Publicado en	Perfil del contratante	BOCM	DOUE	
	<fecha perfil>	<fecha BOCM>	<fecha DOUE>	

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, así como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicación, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa económica, organizativa, técnica o de producción para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las condiciones siguientes:

FASE DE INVESTIGACION E INNOVACIÓN

	Base imponible
Diseño del modelo de colaboración (1)	
Diseño del modelo teórico de intervención (2)	
TOTAL BASE IMPONIBLE (A)	

(1) La base imponible no podrá ser superior a 88.700,00 euros, en caso contrario, será rechazada la oferta

(2) Las base imponible no podrá ser superior a 211.300 euros, en caso contrario, será rechazada la oferta

FASE DE INTERVENCIÓN

Resultados cláusula 6 del PPT	Precio unitario ofertado	Número máximo personas	TOTAL
Activación y compromiso de participación (3)		50	
Plan de salida autónoma de la situación de sinhogarismo (4)			

Mejora del bienestar auto percibido (4)			
Incremento de ingresos económicos ⁽⁵⁾			
Vivienda ⁽⁶⁾			
TOTAL BASE IMPONIBLE (B)			

(3) No podrá ser superior a 6.000,00 euros, en caso contrario, será rechazada la oferta

(4) No podrá ser superior a 3.000,00 euros, en caso contrario, será rechazada la oferta

(5) No podrá ser superior a 6.000,00 euros, en caso contrario, será rechazada la oferta

(6) No podrá ser superior a 24.000,00 euros, en caso contrario, será rechazada la oferta

OFERTA

Base imponible (A) FASE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	+	Base imponible (B) FASE DE INTERVENCIÓN	=	TOTAL BASE IMPONIBLE (7)	10 % IVA	IMPORTE TOTAL

(7) La Base imponible no podrá ser superior a 2.400.000,00 euros, en caso contrario, será rechazada la oferta.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE

ANEXO II

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) Y ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN.

FORMULARIO

El servicio en línea gratuito DEUC electrónico permite cumplimentar este documento por vía electrónica en la siguiente dirección de Internet: <https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es>.

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DEUC

Cada empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa concurre a la licitación en unión temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura UTE deberá presentar un formulario normalizado del DEUC.

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora

Esta parte del documento se completa por el órgano de contratación. El resto del formulario se rellenará por el licitador.

La parte I se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitación o bien una vez publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio DEUC el número de identificación que proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, se completa automáticamente la información sobre el procedimiento y el poder adjudicador.

Creado el modelo del DEUC para esta licitación, el órgano de contratación obtiene un archivo en formato XML, mediante la opción exportar, que debe almacenar localmente en su equipo para publicarlo, junto con los demás documentos de la convocatoria (como documentación complementaria) en el *Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-*.

La empresa licitadora deberá almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y publicado previamente por el órgano de contratación, y acceder después al servicio DEUC electrónico, donde deberá importarlo, cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y almacenarlo en su equipo en formato electrónico, firmarlo (electrónicamente en el supuesto de licitación electrónica) y presentar el DEUC con los demás documentos de la licitación.

Parte II: Información sobre el operador económico

Esta parte recoge información sobre la empresa licitadora.

En la identificación del operador económico, como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata de ciudadanos o empresas españoles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en España, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados o tiene un certificado equivalente, la empresa debe contestar:

Sí: si se encuentra clasificada.

No: si no se encuentra clasificada.

No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita.

Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa está clasificada como contratista de obras o de servicios. Como número de inscripción o certificación basta con consignar el propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.

Para indicar si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en formato electrónico, la página web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público es <https://registrodelicitadores.gob.es>; la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, y la "referencia exacta de la documentación" debe entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, según el caso.

Como clasificación obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoría.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados» solo deberán facilitar en cada parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no

estén inscritos en estas «listas oficiales». Así, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE), siempre que se indique en el formulario normalizado del DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados en el Registro de Licitadores y cuáles no están inscritos o, estándolo, no están actualizados. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos, no consten en el Registro o no figuren actualizados, la empresa deberá aportarlos mediante la cumplimentación del citado formulario.

Parte III: Motivos de exclusión

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislación, para facilitar la adecuada cumplimentación de esta parte del formulario, a continuación se indica una tabla de equivalencias entre cada una de las preguntas que deben responder las empresas, los artículos de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o "DN") y, por último, los artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) que han dado transposición al artículo 57 de la DN.

Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECE, las empresas deberán responder a todas las preguntas que se formulan en la parte III del formulario normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC

Parte III, Nº de sección	D.N.	L.C.S.P.
Sección A	Artículo 57.1.	Artículo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social).
Sección B	Artículo 57.2.	Artículo 71.1: Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Pública o contra la Seguridad Social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social). Letra d), primer párrafo, primer inciso. Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
Sección C		
Primera pregunta	Artículo 57.4.a)	Artículo 71.1.b) (cuando no sea infracción muy grave en materia profesional o en materia de falseamiento de la competencia); Artículo 71.1.d) primer párrafo, segundo inciso (en lo relativo al incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con discapacidad.).
Segunda pregunta	Artículo 57.4.b)	Artículo 71.1.c)
Tercera pregunta	Artículo 57.4.c)	Artículo 71.1.b) (infracción muy grave en materia profesional).
Cuarta pregunta	Artículo 57.4.d)	Artículo 71.1.b) (infracción muy grave en materia de falseamiento de la competencia).
Quinta pregunta	Artículo 57.4.e)	Artículo 71.1.g) y h).
Sexta pregunta	Artículo 57.4.f)	Artículo 70.
Séptima pregunta	Artículo 57.4.g)	Artículo 71.2, letras c) y d).
Octava pregunta		
Letras a), b) y c)	Artículo 57.4.h)	Artículo 71.1, letra e) y 71.2, letras a) y b).
Letra d)	Artículo 57.4.i)	Artículo 71.1.e).
Sección D		Artículo 71.1.f) (cuando se trate de sanción administrativa firme con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

Parte IV: Criterios de selección.

El órgano de contratación podrá limitar la información requerida sobre los criterios de selección a la pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de selección necesarios. En este caso únicamente será necesario que la empresa interesada cumplimente la sección “A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN”, omitiendo cualquier otra sección de esta parte. Aunque, posteriormente, podrá solicitarles información o documentación adicional.

En caso contrario, el órgano de contratación debe determinar los criterios de selección exigibles, y la empresa facilitar la información sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios de selección que se hayan indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta parte que procedan.

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados

En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte.

Parte VI. Declaraciones finales.

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.

Para más información sobre la cumplimentación del formulario se puede consultar la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública (B.O.E. de 8 de abril de 2016).

ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE MÚLTIPLE

Órgano de contratación:	Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
Número de expediente:	049/2026
Título del contrato:	<i>"Experimentación del contrato de impacto social como instrumento de financiación de los servicios sociales, para prevenir la cronificación de las situaciones de sinhogarismo, cofinanciado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATIONEU"</i>

D./Dña , con DNI/NIE ,
actuando (en nombre propio o en representación del licitador)
..... , con NIF nº , con
domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etc): , nº: ,
población: , provincia:
y código postal: , en calidad de , teléfono nº: ,
correo electrónico: , en relación con el expediente
de contratación arriba referenciado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el pliego de cláusulas administrativas particulares
(PCAP) del contrato:

DECLARA RESPONSABLEMENTE: *(márquese y complétese lo que proceda)*

Capacidad para contratar y solvencia requerida.

- ☐ Que la sociedad cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato.
- ☐ Que la sociedad no se encuentra incurso en ninguna prohibición de contratar.
- ☐ Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, así como el firmante, se hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar señaladas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.
- ☐ Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
- ☐ Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrará que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del órgano de contratación.

Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

- ☐ Que se encuentra inscrito en el registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
- ☐ Que ha presentado la solicitud de inscripción en el citado Registro junto con la documentación preceptiva para ello y no ha recibido requerimiento de subsanación.

Pertenencia o no a grupo empresarial.

- ☐ Que no pertenece a ningún grupo empresarial (*no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese artículo*).
- ☐ Que pertenece al siguiente grupo empresarial:
- ☐ Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.
- ☐ Que también presenta/n oferta la/s empresa/s siguiente/s de mismo grupo empresarial (indicar nombre)

Jurisdicción para empresas extranjeras.

- ☐ Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concreción de la solvencia requerida.

- ☐ Que, si en la cláusula 1 del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato, ese personal será el siguiente (*indicar el nombre de cada una de las personas y su cualificación profesional*):
.....
.....
- ☐ Que, de resultar adjudicatario del contrato, si así se requiere en la cláusula 1 del PCAP, se compromete a dedicar o adscribir a su ejecución los medios personales y/o materiales que se especifican en la citada cláusula, con las características, requisitos y condiciones que se señalan en ella.

Subcontratación.

- Si en la cláusula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que tengan previsto subcontratar:
 - ☐ Que no tiene prevista ninguna subcontratación.
 - ☐ Que tiene previsto subcontratar:
 - La siguiente parte del contrato:
 - Por importe de:
 - Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s):(En caso de división en lotes, indíquese esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la subcontratación)
- Si la ejecución del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro directivo promotor como responsable del tratamiento:
 - ☐ Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.
 - ☐ Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s):

Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres.

- ☐ Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.
- ☐ Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más trabajadores, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.
- Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva. **(Se trata de un compromiso durante la vigencia del contrato independientemente del número de trabajadores con los que cuente en la actualidad).**
- ☐ Que se trata de una empresa de 50 o más trabajadores y asume la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como que:
- ☐ Su plan de igualdad está inscrito en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente.
 - ☐ Ha presentado la solicitud de inscripción de su plan de igualdad en el citado registro junto con la documentación preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber recibido notificación de decisión alguna sobre la misma, lo que se compromete a acreditar ante el órgano de contratación cuando sea requerido para ello.

Oposición del licitador a la consulta de sus datos por medios electrónicos (en su caso).

- ☐ Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrónicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demás datos y documentos que se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, así como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
- No obstante, la mesa y el órgano de contratación podrán consultar en todo caso los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en
..... (firmar electrónicamente).

- En el caso de licitación en unión temporal de empresarios, deberá presentarse una declaración responsable por cada una de las empresas componentes de la UTE (art. 140.1 e) de la Ley 9/20117, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).
- Esta declaración responsable deberá ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.

ANEXO IV.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

D./Dña. _____, con
DNI/NIE _____, en nombre propio o en representación de la empresa _____
_____, con N.I.F. nº _____, en calidad de _____
_____, al objeto de nuestra participación en el presente contrato de servicios de la
Comunidad de Madrid denominado “*Experimentación del contrato de impacto social como instrumento de
financiación de los servicios sociales, para prevenir la cronificación de las situaciones de sinhogarismo,
cofinanciado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea –
NEXTGENERATIONEU*” se compromete al cumplimiento de las siguientes mejoras y en las condiciones que
figuran en el apartado 9.2. de la Cláusula 1 de este Pliego:

	1. Incremento del número de personas participantes en la intervención.	
	Ampliación del número máximo (50) previsto en la cláusula 2 del PPTP.	
	Se asignará la máxima puntuación (20 puntos) a la oferta presentada por la entidad que incluya un mayor número de personas participantes en la intervención, hasta un máximo de 100, y se asignará la puntuación directamente proporcional al resto de ofertas.	
	Oferta ____ (número) personas participantes en la intervención (hasta un máximo de 100)	
	2. Experiencia acreditada en publicaciones de investigación sobre la intervención con personas sin hogar.	
	Se asignará la máxima puntuación (20 puntos) a la oferta presentada por la entidad que justifique la experiencia en un mayor número de publicaciones de investigación sobre la intervención con personas sin hogar, y se asignará la puntuación directamente proporcional al resto de ofertas.	
	Oferta ____ (número) publicaciones de investigación sobre intervención con personas sin hogar.	
	3. Experiencia acreditada de la persona directora de los trabajos.	
	Se asignará la máxima puntuación (20 puntos) a la oferta presentada por la entidad que justifique la experiencia de la persona directora de los trabajos en intervenciones con personas sin hogar, durante un mayor número de años, hasta un máximo de 10 años, y se asignará la puntuación directamente proporcional al resto de ofertas.	
	Oferta ____ años de experiencia de la persona directora de los trabajos en intervenciones con personas sin hogar (hasta un máximo de 10 años).	

Para la acreditación de los criterios anteriores, deberá aportarle la documentación prevista en el apartado 10 de la cláusula 1 del presente Pliego.

La no aportación de la documentación técnica referida en el apartado, conllevará la asignación de cero puntos en el criterio correspondiente.

En todos los casos, la declaración responsable debe ser firmada por la persona responsable de la entidad o asociación empresarial licitadora.

Si no marcan ninguna casilla, se entenderá que no ofertan la mejora correspondiente.

En _____, a _____ de _____ de _____

Firmado:

ANEXO V

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS TRANSVERSALES

D./Dña., con
DNI/NIE, como titular del órgano / Consejero Delegado / Gerente / de la entidad
....., con N.I.F. nº, y domicilio fiscal
en, que participa como contratista/subcontratista, en el desarrollo
de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 22.I2.P04.S47
a través del expediente de contratación nº 049/2026 denominado *“Experimentación del contrato de impacto
social como instrumento de financiación de los servicios sociales, para prevenir la cronificación de las
situaciones de sinhogarismo, cofinanciado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –
financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATIONEU”*, suscrito con este Organismo, manifiesta el
compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el
cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y
detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que
proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía
circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés
«do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y
manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad
con el régimen de ayudas de Estado.

En, a de de

Firmado:

Cargo:

ANEXO VI

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (DACI) EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE “EXPERIMENTACIÓN DEL CONTRATO DE IMPACTO SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PARA PREVENIR LA CRONIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE SINHOGARISMO”, A ADJUDICAR MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, COFINANCIADO POR EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”.

Código Coffe: C22.I2.P04.S47

Expediente: 049/2026

El/La abajo firmante con DNI, actuando:

☐ En su nombre

☐ En representación de la, con NIF.....

A.DECLARA que:

- a) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, dictada por la autoridad competente de un Estado miembro de la UE por cualquier delito que afecte a su ética profesional, salvo que el delito haya prescrito;
- b) no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda ser alegada por cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de cumplir la sanción, salvo que la falta haya prescrito;
- c) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupción, participación en una organización criminal, blanqueo de capitales o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Unión Europea, salvo que el delito haya prescrito;
- d) no ha sido objeto de una sanción administrativa, estando pendiente de su cumplimiento, por haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida por las autoridades competentes, o por no haber facilitado dicha información, salvo que la falta haya prescrito.

B.DECLARA que las personas físicas con poder de representación, de toma de decisiones o de control sobre la entidad **NO** se encuentran en los casos mencionados en el apartado anterior.

C.DECLARA que:

- a) no está afectado por ningún conflicto de intereses en relación con la tramitación del expediente arriba indicado, entendiéndose que el conflicto de intereses podría plantearse en particular como consecuencia de intereses compartidos de naturaleza económica, o por vínculos familiares en línea recta ascendente y descendente, cualquiera que sea el grado, o en línea colateral hasta el tercer grado, alcanzando a los parientes por consanguinidad y afinidad y a los derivados de relaciones afectivas similares;

- b) informará a la Comunidad de Madrid, sin demora, de cualquier situación que constituya conflicto de intereses o pudiera dar lugar a tal conflicto;
- c) no ha concedido ni concederá, no ha buscado ni buscará, no ha intentado ni intentará obtener, y no ha aceptado ni aceptará ningún tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor de nadie ni por parte de nadie, cuando tal ventaja constituya una práctica ilegal o implique corrupción o fraude, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa derivados de su participación directa o indirecta en la operación cofinanciable a través de la concesión de una subvención, la adjudicación de un contrato o la encomienda de una actividad;
- d) ha suministrado información exacta, veraz y completa a la Comunidad de Madrid en el marco de la presente operación;

D.RECONOCE que la entidad podrá ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se demostrara que las declaraciones o la información facilitadas son falsas.

ANEXO VII

Cesión y tratamiento de datos – Modelos de declaración

CONTRATO: “EXPERIMENTACIÓN DEL CONTRATO DE IMPACTO SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PARA PREVENIR LA CRONIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE SINHOGARISMO”, A ADJUDICAR MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, COFINANCIADO POR EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”.

Código Coffe: C22.I2.P04.S47 .

Expediente: 049/2026

D./Dña., con
DNI/NIE, como Consejero Delegado / Gerente / de la entidad
....., con N.I.F. nº, y domicilio fiscal
en, beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes

del PRTR/ que participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente C22.I2.P04.S47)», declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular los siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:
 - i. El nombre del perceptor final de los fondos;
 - ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;
 - iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);
 - iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.

En, a de de
Firmado:

Cargo:

ANEXO VIII. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Órgano de contratación:	Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
Número de expediente:	049/2026
Título del contrato:	"Experimentación del contrato de impacto social como instrumento de financiación de los servicios sociales, para prevenir la cronificación de las situaciones de sinhogarismo, cofinanciado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATIONEU"

D./Dña, con DNI/NIE, actuando (en nombre propio o en representación del licitador), con NIF nº, con domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etc):, nº:, población:, provincia: y código postal:, en calidad de, teléfono nº:, correo electrónico:, en relación con el expediente de contratación arriba referenciado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

DECLARA RESPONSABLEMENTE: (márquese y complétese lo que proceda)

Tratamiento de datos personales.

- ☐ Que ofrece las garantías suficientes, propias de un encargado de tratamiento, para aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas conforme a lo establecido en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679 y concordantes de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
- ☐ Que se someterá a la normativa vigente de protección de datos personales, respecto al tratamiento de datos objeto del encargo de tratamiento derivados de la ejecución del contrato, así como a las instrucciones del responsable del tratamiento
- ☐ Que conoce que las obligaciones relativas a la protección de datos tienen el carácter de obligaciones esenciales y los efectos que ello conlleva.

Ubicación de los servidores y/o servicios asociados. (1)

- ☐ Los servidores que contengan los datos personales estarán ubicados en
- ☐ Los servicios asociados (tránsito, call center,...) que se realicen con los datos personales se prestarán desde:
- ☐ Otros (especificar cuáles):

4. Para las categorías especiales de datos [artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679] los servidores deberán estar ubicados en la Unión Europea. Para aquellos servidores fuera del territorio de la Unión Europea (véase nulidad del *Privacy Shield USA*, STJUE de 16 de julio 2020) se deberá verificar que el país destinatario/de tránsito haya sido declarado de nivel de protección adecuado por la Comisión Europea (<https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales>).

Asimismo, durante toda la vida del contrato, asume la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca respecto a la información facilitada en la presente declaración.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en (firmar electrónicamente).